**H. CONGRESO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**

**PRESENTE. -**

La Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 64, fracción I de la Constitución Política del Estado de Chihuahua, 87, 88 y 111 de la Ley Orgánica, así como por los artículos 80 y 81 del Reglamento Interior y de Prácticas Parlamentarias, ambos ordenamientos del Poder Legislativo del Estado de Chihuahua, somete a la consideración del Pleno el presente Dictamen, elaborado con base en los siguientes:

**ANTECEDENTES**

**I**.- Con fechaveinte de octubre del año dos mil veintidós, la Mtra. María Eugenia Campos Galván, Gobernadora Constitucional del Estado de Chihuahua, presentó iniciativa con carácter de Decreto a efecto de expedir la Ley de Gobierno Digital para el Estado de Chihuahua.

**II.-** La Presidencia del H. Congreso del Estado, en uso de las facultades que le confiere el artículo 75, fracción XIII, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, con fecha veinticinco de octubre de dos mil veintidós, tuvo a bien turnar a esta Comisión de Dictamen dicha iniciativa a efecto de proceder al estudio, análisis y elaboración del dictamen correspondiente.

**III.-** La iniciativa se sustenta en los siguientes argumentos:

*“En los últimos años del siglo XX y principios del XXI inició el auge de la era tecnológica con la creación, implementación e introducción de una serie de herramientas que han facilitado la realización de las actividades cotidianas del ser humano. Dichas herramientas se han implementado en diferentes sectores, como en el caso de la industria automotriz para la automatización robotizada, en el sector académico para enseñanza a distancia y, por supuesto, en los procesos industriales, donde destacan la manufactura aeroespacial y nanotecnológica. Lo anterior, ha permitido la consolidación de grandes corporaciones y la emergencia de otras, coadyuvando al crecimiento económico, y mejorando la calidad de vida de las personas.*

*De forma vertiginosa, las tecnologías de la información y comunicaciones (TIC) han sido los medios por los cuales se han establecido una serie de estrategias y de acciones a seguir para que las organizaciones inicien una transición de resultados basados en eficiencia, a aquellos que se basan en la efectividad por el uso estratégico de las TIC.*

*Ante ello, el sector privado ha solicitado de los gobiernos y de los poderes públicos, un cambio en la forma en la que se realizan las interacciones para agilizar los trámites y servicios; por lo mismo, diversos países alrededor del mundo han realizado acciones que van desde la optimización de sus procesos internos, hasta la adopción de tecnologías modernas basadas en telepresencia, en los que se busca consolidar no solo la eficiencia gubernamental, sino la seguridad y certeza jurídicas, dotando a los particulares de los instrumentos y mecanismos que permitan que la interacción entre el sector público y privado sea más ágil y eficiente.*

*Un primer paso de la transición de la gestión pública tradicional al uso estratégico de las TIC, en las funciones de los entes gubernamentales, se dio en la etapa de la apertura de la información pública gubernamental, donde solamente se ponía a disposición del público cierta información que les permitía conocer cuestiones fundamentales referentes a la solicitud de trámites, el costo de los mismos y, en ocasiones, servían como un medio de difusión para conocer las actividades que realizan las y los servidores públicos. A partir de ahí se inició la apertura gubernamental, pero la interacción entre Estado y particulares seguía siendo cara a cara.*

*Sin embargo, a partir del uso intensivo de las TIC para facilitar, no solamente el acceso a la información, sino la interacción entre personas que se encuentran en diferentes lugares, ha sido necesaria, derivando en la introducción de instrumentos tecnológicos en los procesos internos de las instituciones públicas, así como en la solicitud, gestión y sustanciación de los diferentes trámites, servicios, procesos y procedimientos administrativos y jurisdiccionales, comunicaciones y demás actos administrativos o de otra índole, que son competencia de las autoridades.*

*Lo anterior, ha traído consigo la creación de una nueva rama de la gestión pública, en la que tanto el uso de las TIC por parte de los particulares como de las instituciones públicas son vitales en la apertura y en la consolidación de la transparencia, mejorando la calidad de los servicios públicos y de la gestión interna de cada una de las instituciones que componen el Estado, surgiendo así, el gobierno digital.*

*Esta nueva forma de hacer la gestión pública ha sido acotada en gran medida al ámbito de aplicación del Poder Ejecutivo, al ser este uno de los órganos que tiene una mayor interacción con los particulares. Sin embargo, cabe destacar que todas las instituciones públicas deben ser partícipes de la consolidación del gobierno digital y de las estrategias que lleven a su implementación y operación. Es decir, tanto los poderes Legislativo y Judicial, los organismos autónomos y las instituciones municipales deben trabajar de manera coordinada para lograr los objetivos que plantean que la función pública debe servir a la ciudadanía, mejorando su calidad de vida y las condiciones necesarias para satisfacer sus necesidades desde el punto de vista económico y de protección de derechos.*

*Asimismo, resulta fundamental consolidar el principio de seguridad jurídica, que establece que los órganos del Estado no pueden realizar más funciones que las que tienen encomendadas por ley. Ante esta situación, resulta fundamental establecer un marco jurídico que no solo le dote de atribuciones a las instituciones públicas para que realicen programas, acciones y estrategias para implementar el uso de la TIC en la función pública, sino que además establezca los lineamientos que permitirán que toda actuación realizada a través de la utilización de instrumentos tecnológicos sea plenamente válida y que se considere como existente, para que surta los efectos legales esperados.*

*Ante esta situación y al atender las demandas y exigencia de la sociedad, que espera un papel activo de los entes públicos respecto a la implementación del gobierno digital, tanto los actores legislativos como las administraciones públicas federal y estatales han realizado esfuerzos en los que se han puesto los cimientos sobre los que se basan los primeros esbozos para implementar un gobierno digital eficiente y acorde a las expectativas de la sociedad.*

*Los primeros avances en esta materia se dieron con la expedición del Acuerdo por el que se establece el Esquema de Interoperabilidad y de Datos Abiertos de la Administración Pública Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de septiembre de dos mil once, y con la expedición de la Ley de Firma Electrónica Avanzada por parte del H. Congreso de la Unión, publicada el once de enero de dos mil doce en el referido órgano de difusión oficial. Estas dos normas fueron los primeros esfuerzos que desde el ámbito federal se realizaron, con el fin de que se pudieran seguir una serie de lineamientos que permitieran la unificación de esfuerzos para implementar el uso de las TIC que, a su vez, pudieran generar certeza y validez jurídica a todo acto realizado por estos medios.*

*Sin embargo, hasta diciembre de dos mil veintiuno solo los Estados de Coahuila, Durango, México, Michoacán, Nuevo León, Puebla, Sinaloa, Tabasco y la Ciudad de México han aprobado leyes en materia de gobierno digital en las que se enmarcan una serie de lineamientos y preceptos sobre los que gira la actividad gubernamental, posibilitando el uso de herramientas tecnológicas como los medios que auxilian no solo a las y los servidores públicos, sino a los particulares, para promover alguna gestión de manera transparente, al evitarse la interacción física, lo cual también abona a la prevención de posibles actos de corrupción.*

*La presente iniciativa encuentra su sustento y alineación con lo establecido en el Plan Estatal de Desarrollo Chihuahua 2022-2027, en especial, en el Eje Cinco denominado <Buen gobierno, cercano y con instituciones sólidas>, que prevé la estrategia de <Simplificar los trámites y servicios otorgados por el Gobierno del Estado>, para lo cual contempla la línea de acción 11, consistente en <Consolidar el uso de las tecnologías de la información para modernizar y fortalecer los sistemas en el Gobierno del Estado para la digitalización de trámites y servicios estatales>. Ello, lleva a que esta nueva norma propuesta establezca las bases y fundamentos sobre los que deben ejecutarse todas aquellas acciones referentes a la planeación, programación, implementación, ejecución, consolidación y puesta en operación de una política pública integral en materia de gobierno digital.*

*Con este proyecto se pretende la consolidación del uso de las TIC dentro del actuar de las instituciones públicas estatales y municipales con el objetivo de proporcionar a la ciudadanía servicios tecnológicos de calidad y facilitar el acercamiento con las y los chihuahuenses y promover el crecimiento y desarrollo de la entidad.*

*Así, el estado de Chihuahua se encuentra en la necesidad de crear un marco jurídico integral e institucional, en el que se establezca la planificación, implementación, ejecución y consolidación del uso estratégico de las TIC como una política de Estado. Lo anterior, tiene como finalidad que todos los órganos del Estado puedan ser partícipes de la política de gobierno digital, siendo ésta uno de los motores que ayudarán a la promoción de Chihuahua, al tener como finalidad la atracción de inversiones, capitales, turismo y, por supuesto, el desarrollo y crecimiento económico de la entidad, al acercar el gobierno a toda persona.*

*Es por esta razón que la presente Administración busca innovar en el uso de tecnologías, brindándole a sus gobernados plataformas digitales que funjan como vínculo de confianza entre el gobierno y la comunidad, optimizando los procesos de diversos trámites y en las cuales converjan ideas y propuestas ciudadanas. Por todo esto la digitalización se considera prioridad ya que la estructuración de un gobierno digital y moderno brinda orden, seguridad y maximiza beneficios a la población.*

*Además, cabe destacar que la creación de las TIC también ha permitido que la comunicación interpersonal haya sufrido una revolución al conectar de una manera más ágil y económica a personas que se encuentran en diferentes partes del mundo. Por ello, resulta indispensable que junto al reconocimiento de los derechos que tienen los particulares, se establezcan canales de comunicación para con los órganos del Estado, en el entendido de que se puedan realizar quejas y éstas puedan atenderse en el menor tiempo posible, a través de mecanismos efectivos en los que sea primordial la cercanía con todos.*

*Por las razones expuestas se presenta el proyecto de Ley de Gobierno Digital para el Estado de Chihuahua, como un nuevo ordenamiento legal en el que se propone enmarcar los principios, bases, lineamientos y disposiciones a seguir por parte de los órganos del Estado y en el que se fundamentaría la política pública en materia de gobierno digital, misma que permitirá consolidar el uso de las TIC en la gestión pública, siendo además el mecanismo sobre el que girará la planeación, presupuestación, programación, ejecución y consolidación de la utilización de instrumentos tecnológicos.*

*En el primer título se encuentran las disposiciones generales de la legislación, en la que se encuentran los objetivos, los sujetos de la norma, los conceptos y definiciones que se insertan en la ley, así como la facultad para la interpretación de la ley, desde el punto de vista administrativo.*

*En el segundo título se plantea el cambio de paradigma de los derechos que tienen los particulares, en relación con la materia de gobierno digital, al establecer, como se dijo anteriormente, el reconocimiento y no el otorgamiento de derechos para los particulares, debiendo el Estado garantizar el ejercicio de dichas prerrogativas y exigir el cumplimiento de obligaciones que todo particular debe observar en el tenor de usar de manera adecuada y responsable, las TIC que se pongan a su disposición.*

*En el tercer título se establece el marco institucional que operará en la programación, implementación, ejecución y consolidación de la política de gobierno digital, al crearse el Consejo de Gobierno Digital, como el órgano colegiado rector de la materia al interior del Ejecutivo del Estado, conformado por las personas titulares de diversas instituciones. Al igual, se establecen las facultades, atribuciones y obligaciones que, conforme a la norma, deberán ejecutar las personas titulares de la Presidencia del Consejo, de la Secretaría Ejecutiva del mismo y de la Coordinación de Política Digital dependiente de la Secretaría de Coordinación de Gabinete.*

*A fin de promover la implementación de la citada política en el resto de órganos del Estado, se prevé que los poderes Judicial y Legislativo, así como los organismos autónomos, instituyan su propio Consejo u órgano colegiado similar, con atribuciones equivalentes a las previstas para el Consejo de Gobierno Digital del Poder Ejecutivo, cuyas acciones y disposiciones deberán estar acotadas al ente público correspondiente.*

*En cuanto al título cuarto, se instituyen los principios y bases sobre los que se establece la política de gobierno digital en el Estado de Chihuahua y se destacan, en primera instancia, las funciones que tienen los órganos del Estado en cuanto a su participación en la consolidación de una estrategia homologada en esta materia, así como las bases sobre las que se soporta la política pública en cuestión, las cuales son:*

*1. El Programa Especial de Gobierno Digital;*

*2. La Estrategia General para el Uso e Implementación de las Tecnologías de la Información y Comunicaciones dentro de los Órganos del Estado;*

*3. El Programa de Seguridad Informática para los Órganos del Estado de Chihuahua;*

*4. Los proyectos internos en materia de tecnologías de la información y comunicaciones de los órganos del Estado, y*

*5. Los convenios de portabilidad.*

*En el título quinto se establecen los instrumentos tecnológicos que permitirán la concreción de la planeación, construcción, instrumentación, ejecución y consolidación de las políticas públicas en materia de gobierno digital, los cuales son los pilares fundamentales para que los particulares puedan ejercer su derecho a interactuar con los órganos del Estado, haciendo uso de las TIC. Ello, se refleja en la regulación sobre el uso de:*

*1. La firma electrónica avanzada;*

*2. Los portales informativos;*

*3. Los portales transaccionales;*

*4. El Registro de Certificados de Firma Electrónica Avanzada de las y los Servidores Públicos del Poder Ejecutivo del Estado de Chihuahua;*

*5. La ventanilla virtual;*

*6. Las aplicaciones móviles;*

*7. Las redes sociales institucionales;*

*8. Los sistemas de información estadística y geográfica;*

*9. El correo electrónico institucional; y*

*10. Los estrados digitales.*

*Por su parte, en el título sexto se establecen las bases y principios en materia de uso de software libre y código abierto, que se retoman de lo establecido en la Ley de Software Libre y Código Abierto del Estado de Chihuahua, al considerarse herramientas fundamentales para mejorar la gestión pública y la eficiencia en los servicios que se otorgan a la ciudadanía, aunado a un ahorro progresivo de recursos públicos. A su vez, las disposiciones vigentes en esta materia se armonizan con la nueva realidad que se genera con la publicación de la Ley de Gobierno Digital para el Estado de Chihuahua, permitiendo que los preceptos referentes a la creación e implementación de software libre y código abierto puedan ajustarse a la política pública en materia de gobierno digital que se está creando con este nuevo marco jurídico, motivo por el cual en el proyecto que se presenta se propone la abrogación de ese ordenamiento legal.*

*Adicionalmente, se prevé un apartado de responsabilidades y medios de defensa. En esta parte el proyecto las previsiones son mínimas, con referencias directas a los cuerpos normativos que regulan ambas materias; lo anterior, para evitar la sobrerregulación legislativa.*

*Finalmente, con el objetivo de que las autoridades que se mencionan en el presente proyecto tengan delimitadas de manera clara las funciones que les competen y con el fin de concentrar esfuerzos para la ejecución de las políticas públicas que aquí se esbozan, se abroga la Ley de Firma Electrónica Avanzada del Estado de Chihuahua y se reforma la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, en lo correspondiente a las atribuciones de la Secretaría de la Función Pública y la Secretaría de Coordinación de Gabinete.*

*En ese esquema, por lo que refiere a las atribuciones otorgadas a la Secretaría de la Función Pública, se elimina la atribución consistente en coordinar la estrategia de digitalización de los trámites y servicios de la Administración Pública Estatal y de las plataformas digitales para la estandarización y cumplimiento de las obligaciones de transparencia respectivas; así como consolidar el uso y aprovechamiento de las tecnologías de la información, para fomentar canales directos de vinculación con la ciudadanía, administrando a su vez la información generada, y en consecuencia, se otorga a la Secretaría de Coordinación de Gabinete la atribución de coordinar la estrategia de digitalización de los trámites, servicios, procesos y procedimientos de la Administración Pública Estatal, así como la implementación de las plataformas digitales que para esto se requieran.”*

**III.-** Ahora bien, al entrar al estudio y análisis de la iniciativa en comento, quienes integramos la Comisión citada en el proemio del presente dictamen, formulamos las siguientes:

**CONSIDERACIONES**

**I.-**Al analizar las facultades competenciales de este Alto Cuerpo Colegiado, quienes integramos esta Comisión de Dictamen Legislativo, no encontramos impedimento alguno para conocer del presente asunto.

**II.-** La iniciativa que se alude en el proemio del presente, tiene por objeto expedir la Ley de Gobierno Digital para el Estado de Chihuahua, para regular y dotar de certeza y validez jurídica a las comunicaciones, trámites, servicios, actos jurídicos y administrativos en los cuales participen las y los servidores públicos de los tres Poderes del Estado, las dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal y municipal, los organismos con autonomía constitucional y legal, prestadores de servicio de certificación y particulares, utilizando su firma electrónica, expedientes digitales, mensajes de datos y documentos digitales.

En el correspondiente ordenamiento jurídico se pretenden establecer las bases para la aplicación de los citados instrumentos electrónicos, así como impulsar las líneas de acción, estrategias y políticas públicas para el uso de las tecnologías de la información y comunicación en el Estado, con lo que la iniciadora pretende lograr el diseño de un modelo de gobierno digital, enfocado a promover la oferta de la información y de servicios del Estado a través de las TIC.

**III.-** La Organización de las Naciones Unidas ha expresado en diversos documentos la relevancia de las tecnologías de la información para nuestra sociedad y la importancia de garantizar que todas las personas tengan acceso a las mismas. Bajo esta concepción, no sólo representan las puertas de acceso al conocimiento, la educación, las ideas, la información o el entretenimiento, sino que también son el punto de partida para la generación del desarrollo económico y social.

La **Declaración de Principios de la Cumbre Mundial sobre la Sociedad de la Información**[[1]](#footnote-1), celebrada en Ginebra en 2003, establece como un desafío para las naciones aprovechar el potencial de las tecnologías de la información para promover los objetivos de desarrollo, en particular, erradicar la pobreza extrema y el hambre, lograr la educación primaria universal, promover la equidad entre géneros y el empoderamiento de las mujeres, reducir la mortandad infantil, mejorar la salud materna, combatir el VIH y otras enfermedades, asegurar un medio ambiente sustentable y en general, asegurar la cooperación entre las naciones. El documento también expresa la relevancia de estas tecnologías para generar crecimiento económico y mejorar la calidad de vida de todos.

Bajo esa perspectiva, el **Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidades** adoptó la **resolución A/HRC/20/L.13[[2]](#footnote-2)** del 29 de junio de 2012 sobre la promoción, protección y disfrute de los derechos humanos en Internet. La relevancia de este documento radica en que reconoce en lenguaje de derechos humanos una serie de derechos de acceso y empleo del internet para todas las personas. Adicionalmente, se exhorta a los Estados para que promuevan y faciliten el acceso a esta herramienta y la cooperación internacional encaminada al desarrollo de los medios de comunicación y los servicios de información y comunicación en todos los países.

Las condiciones de las nuevas tecnologías han obligado a una reformulación del contenido tradicional de las libertades de expresión y de difusión. Hoy se considera que la garantía de estas libertades no sólo implica el deber de abstención del Estado de interferir en su acceso o contenidos, sino que se extiende a su obligación de evitar que estos derechos sean limitados por terceros y promover las condiciones necesarias para el goce efectivo de los mismos. Conviene recordar a este respecto que la **Corte Interamericana de Derechos Humanos** en su **Opinión Consultiva OC-5/85[[3]](#footnote-3)** del 13 de noviembre de 1985, señaló claramente que los monopolios u oligopolios en la propiedad y control de los medios de comunicación atentan contra las libertades de expresión e información. En consecuencia, es una obligación de los Estados tomar todas las acciones necesarias para evitar las concentraciones que de hecho o de derecho limiten o impidan el acceso más amplio posible a estas tecnologías. En el mismo sentido, la **Comisión Interamericana de los Derechos Humanos** ha señalado que las asignaciones de radio y televisión deben considerar derechos democráticos que garanticen una verdadera igualdad de oportunidades para todos los individuos en el acceso a los mismos.[[4]](#footnote-4)

Existen diversos precedentes internacionales que reconocen el derecho al acceso a las tecnologías de la información y a la banda ancha, ya sea a nivel constitucional, como es el caso de Grecia; establecido en leyes generales, como en Finlandia, Perú, España, y Estonia, o por jurisprudencia, como ocurre en Francia y Costa Rica, por citar algunos ejemplos.

Por su parte, en la **Declaración Conjunta sobre Libertad de Expresión e Internet (OEA)[[5]](#footnote-5)** del 1 de junio de 2011 se estableció que los Estados “tienen la obligación de promover el acceso universal a internet para garantizar el disfrute efectivo del derecho a la libertad de expresión. El acceso a internet también es necesario para asegurar el respeto de otros derechos, como el derecho a la educación, la atención de la salud y el trabajo, el derecho de reunión y asociación, y el derecho a elecciones libres”.

En esta medida, el acceso efectivo a las tecnologías de la información y a la banda ancha, se reconoce como una pieza clave en el desarrollo de una política de promoción, respeto, protección y garantía de los derechos humanos, indispensable para la construcción en nuestro país de una sociedad de derechos y libertades, tal y como lo prevé el párrafo tercero del artículo 1o. de la Constitución.

**IV.-** Con el transcurrir de los años y el desarrollo acelerado de las tecnologías de información y comunicación (TIC), los paradigmas de la gestión gubernamental, han pasado de ser conceptos hasta llegar a ser acciones que conjugan hoy por hoy la aplicación intensiva de dichas tecnologías y las diferentes modalidades de planificación, administración y operación gubernamental; para así lograr nuevas formas de gobierno, simplificando procesos y creando canales que permitan aumentar la participación ciudadana y la transparencia, mejorando así los servicios e información ofrecida a sus habitantes.

De la suma de estas acciones surge el gobierno electrónico (GE) o e-government, como un instrumento de base tecnológica que tiene el potencial de generar crecimiento económico, así como reducción o eficiencia de costos, si cumple con el objetivo de hacer más sencillas las interacciones entre gobierno y la ciudadanía.

En este aspecto, para determinar hasta qué punto los países están preparados para brindar servicios de GE, las Naciones Unidas publicó a fines de septiembre la 12va. edición de la **Encuesta de Gobierno Electrónico 2022**[[6]](#footnote-6), que corresponde a la evaluación bianual que lleva a cabo la ONU sobre el panorama del gobierno digital en los 193 estados miembros, utilizando el E-Government Development Index (EGDI).

Con base en el Índice de Gobierno Electrónico nuestro país ocupa el lugar 62 de 193 naciones, respecto al desarrollo del Gobierno sin Papel, por lo que resulta de suma importancia para México y en especial para nuestra Entidad, implantar plataformas encaminadas a desarrollar el Gobierno Electrónico, con el fin de poder facilitar a las personas la interacción que se tiene con los órganos del Estado.

Cabe señalar, que a pesar de que el país ocupa los escaños más bajos de los países miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) en inversión en tecnologías de información y comunicación (TIC) por parte del gobierno[[7]](#footnote-7), ha invertido en los últimos años más de 100,000 mil millones de pesos (Gráfico 1).

*Gráfico 1. Evaluación del Presupuesto Federal en Tecnologías de la Información y Comunicaciones 2012-2023.*



La inversión en tecnología puede representar cambios sustantivos en la forma en la que se organiza el Estado, sin embargo, hasta ahora no hay una política pública unidireccional que conjunte todos los esfuerzos del Estado mexicano para avanzar de manera homogénea en el aprovechamiento de las tecnologías de información y comunicación (TIC) en todos los órdenes de gobierno y en los tres poderes. Lo anterior no es impedimento para que haya esfuerzos –aunque desarticulados- para utilizarlas en la resolución de problemas de eficiencia y eficacia, en la transparencia y protección de datos personales, en la rendición de cuentas, en la mejora regulatoria, en modelos de interacción ciudadanía-gobierno, ventanillas únicas digitales y en algunos casos, interposición y resolución de medios impugnativos en instancias jurisdiccionales, por citar algunos ejemplos.

La disparidad de procesos, plataformas, formatos y softwares no es privativa del caso mexicano, es una tendencia global, pues la correcta implementación del gobierno digital o gobierno electrónico depende de variables generales como la infraestructura de conectividad a internet, la capacidad económica y financiera para adquirir dispositivos digitales y los modelos de gestión pública. Pero a pesar de lo novedoso de los términos gobierno digital y gobierno electrónico, lo cierto es que el uso de las tecnologías de información y comunicación (TIC) en actividades estatales data de por lo menos, setenta años.

**V.-** Respecto a los antecedentes del Gobierno Digital, ANDERSEN Y DAWES[[8]](#footnote-8) plantean que la utilización de las tecnologías de información y comunicación (TIC) en el gobierno se ha desarrollado en al menos, cuatro grandes etapas.

La primera etapa data de los últimos años de la década de los 50 y los primeros de los 60. Esta estuvo caracterizada por la introducción de las computadoras que tenían una capacidad de procesamiento de información en lotes (batch processing). Con esta tecnología se avanzó en la automatización de procesos de tareas repetitivas como el pago de nóminas y el cálculo de impuestos.

La segunda etapa se desarrolló durante la segunda mitad de los años 60 y la década de los 70 y consistió en la proliferación de las computadoras centrales (mainframes) y, por lo tanto, algunas organizaciones gubernamentales con capacidad económica adquirieron sus propios equipos para satisfacer sus necesidades de procesamiento de información.[[9]](#footnote-9)

La tercera etapa se remonta a los años 80 y el inicio de los años 90, en la que aparecieron las computadoras personales gracias al desarrollo tecnológico y la innovación que permitieron que la capacidad de procesamiento se incrementara, y que a la par, la reducción del tamaño de los dispositivos, impactaron favorablemente en la reducción de los costos de producción y, en consecuencia, en los costos de venta, haciéndolas cada más accesibles. Durante esta etapa muchas organizaciones gubernamentales dieron un salto tecnológico no sólo en la obtención de más y mejores computadores, sino que se comenzó a capacitar a personal especializado en el manejo de los nuevos equipos. En esta etapa, el principal reto en el uso de las computadoras en el sector público residía en el intercambio oportuno de información en un contexto en el que las plataformas eran diversas e incompatibles, problema que se resolvió parcialmente cuando Microsoft lanzó el sistema MS-DOS.

La cuarta etapa está caracterizada por la masificación del acceso a internet y el desarrollo de las redes computacionales globales y por el bajo costo de equipos de cómputo y dispositivos electrónicos con conectividad a internet (computadoras portátiles, tabletas y teléfonos inteligentes). En esta etapa, a finales de los años 90, surgió el término “e-Goverment” como un correlato de su primo lingüístico: el “e-Commerce”. El término Gobierno Digital comenzó a utilizarse entre profesionales a cargo de las tecnologías de información y comunicación (TIC) y sistemas de información que utilizaba el gobierno[[10]](#footnote-10). Si bien es cierto que internet ha facilitado en demasía el procesamiento de información, también lo es que ha complejizado la interoperabilidad y el intercambio de información, además de que la vulnerabilidad de algunos sistemas de redes computacionales ha visibilizado la necesidad de crear programas integrales de ciberseguridad. El Gobierno Digital en esta fase de su desarrollo se ha convertido en una tarea multidisciplinaria en la que intervienen expertos en tecnología, comunicación, derecho, ciencia política y administración pública.

Quizá una nueva etapa, una quinta etapa, del Gobierno Digital ha comenzado a gestarse a raíz de la pandemia causada por el Covid-19. Durante el aislamiento social obligatorio las tecnologías de información y comunicación (TIC) fueron la respuesta emergente para suplir la interacción presencial de las personas, tanto en las relaciones sociales en general, como en particular en la educación y en el trabajo desde casa. Esto mostró de manera inmediata la gran brecha digital entre las personas, producto de las asimetrías económicas, que existe a nivel global, regional, nacional y en nuestro caso, estatal y municipal en nuestro Estado.

La relación ciudadanía-gobierno tuvo que trasladarse también hacia los entornos virtuales.[[11]](#footnote-11) El Gobierno Digital, aún sin planearse y programarse, se convirtió en la única de modalidad de contacto entre la ciudadanía y el Estado. Adicionalmente, hay que poner en el horizonte y a la vista, el fenómeno de que el comercio electrónico marcó una pauta en las expectativas de la ciudadanía pues se hizo evidente que había un desfase en la atención y servicios brindados por la iniciativa privada contrastados con los trámites y servicios públicos.

Tal como se puede apreciar, el Gobierno Digital tiene unas raíces históricas que se hunden y confunden con la propia aparición de las tecnologías de información y comunicación (TIC), pero que ha ido evolucionando, aunque de manera heterogénea y dispersa, pues responde a circunstancias y particularidades de los contextos locales.

**VI.-** Resulta importante resaltar que en el ámbito académico no hay un consenso generalizado sobre el concepto Gobierno Digital, el cual se puede considerar como un término en disputa, debido a la heterogeneidad de procesos, plataformas y modelos de gestión que convergen en su práctica. GILGARCÍA Y LUNA-REYES, expertos en Gobierno Digital, lo han definido como:

*“… la selección, desarrollo, implementación y uso de tecnologías de información y comunicación en el gobierno para proveer servicios públicos, mejorar la efectividad administrativa y promover valores y mecanismos democráticos, así como el rediseño y desarrollo de marcos legales y reglamentarios que faciliten ajustes organizacionales para el desarrollo de iniciativas orientadas a mejorar el uso de la información, así como el desarrollo de la sociedad de la información y el conocimiento.”[[12]](#footnote-12)*

A continuación, se enuncian las entidades federativas que tienen entre sus ordenamientos legales un instrumento específico para regular jurídicamente el Gobierno Digital:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Estado | Nomenclatura de la Ley | Fecha de publicación |
| Nuevo León | Ley sobre Gobierno Electrónico y Fomento al uso de las Tecnologías de la Información del Estado  | 04/Julio/2013 |
| Puebla  | Ley de Gobierno Digital para el Estado de Puebla y sus Municipios | 11/Febrero/2015 |
| Estado de México | Ley de Gobierno Digital del Estado de México y sus Municipios | 06/Enero/2016 |
| Coahuila | Ley sobre gobierno electrónico y fomento al uso de tecnologías digitales de información del estado de Coahuila de Zaragoza | 11/Marzo/2016 |
| Sinaloa | Ley de Gobierno Electrónico del Estado de Sinaloa | 01/Agosto/2016 |
| Durango | Ley de Gobierno Digital del Estado de Durango | 19/Julio/2018 |
| Tabasco | Ley de Gobierno Digital y Firma Electrónica para el Estado de Tabasco y sus Municipios | 26/Diciembre/2018 |
| Ciudad de México | Ley de Ciudadanía Digital de la Ciudad de México | 09/Enero/2020 |
| Michoacán | Ley de Gobierno Digital del Estado de Michoacán de Ocampo | 02/Septiembre/2021 |
| Querétaro | Ley de Gobierno Digital del Estado de Querétaro | 20/Mayo/2022 |

No omitimos destacar que, en nuestro país desde el año 2004 se lleva a cabo una medición sobre el avance del gobierno digital a través de un modelo de análisis que arroja el Índice de Gobierno Electrónico Estatal (IGEE), esfuerzo conjunto desarrollado por investigadores de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEM), el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE A.C.) y la Fundación Universidad de las Américas Puebla. Este modelo de comparación entre portales electrónicos estatales permite observar el avance o retroceso en la implementación del gobierno digital teniendo como dimensiones a evaluar la información, interacción, transacción, integración y participación. El IGEE correspondiente al año 2019 coloca a Chihuahua en el lugar número 4 del Ranking de Portales Estatales.[[13]](#footnote-13)

En lo que respecta con la conectividad a internet, la Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologías de la Información en los Hogares (ENDUTIH) 2021 realizada por el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI), arrojó que Chihuahua se encuentra por arriba de la media nacional (66.4%) en el porcentaje de hogares con internet, puesto que su cobertura es de 68.7% de hogares, un tanto alejado de entidades federativas como Sonora y Ciudad de México, las cuales rondan el 86 y 85% de hogares con conectividad a internet.

**VII.-** El 11 de junio de 2013 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el **Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de telecomunicaciones[[14]](#footnote-14)**, en el que se dispuso en el artículo 6º que el Estado debe garantizar el derecho humano de acceso a las tecnologías de la información y comunicación, dicha reforma en lo que interesa, establece lo siguiente:

*"Artículo 6o. La manifestación de ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa, sino en el caso de que ataque a la moral, la vida privada o los derechos de terceros, provoque algún delito, o perturbe el orden público; el derecho de réplica será ejercido en los términos dispuestos por la ley. El derecho a la información será garantizado por el Estado.*

*"Toda persona tiene derecho al libre acceso a información plural y oportuna, así como a buscar, recibir y difundir información e ideas de toda índole por cualquier medio de expresión.*

*"El Estado garantizará el derecho de acceso a las tecnologías de la información y comunicación, así como a los servicios de radiodifusión y telecomunicaciones, incluido el de banda ancha e Internet. Para tales efectos, el Estado establecerá condiciones de competencia efectiva en la prestación de dichos servicios.*

*"...*

*"B. En materia de radiodifusión y telecomunicaciones:*

*"I. El Estado garantizará a la población su integración a la sociedad de la información y el conocimiento, mediante una política de inclusión digital universal con metas anuales y sexenales.*

*"II. Las telecomunicaciones son servicios públicos de interés general, por lo que el Estado garantizará que sean prestados en condiciones de competencia, calidad, pluralidad, cobertura universal, interconexión, convergencia, continuidad, acceso libre y sin injerencias arbitrarias.*

*"III. La radiodifusión es un servicio público de interés general, por lo que el Estado garantizará que sea prestado en condiciones de competencia y calidad y brinde los beneficios de la cultura a toda la población, preservando la pluralidad y la veracidad de la información, así como el fomento de los valores de la identidad nacional, contribuyendo a los fines establecidos en el artículo 3o. de esta Constitución."*

De la lectura anterior, se desprende que el Estado tiene la obligación de garantizar a la población su integración a la sociedad de la información y el conocimiento, mediante una política de inclusión digital universal con metas anuales y sexenales.

Cabe señalar, que derivado de la reforma constitucional antes referida, en noviembre de 2013 se presentó la **Estrategia Digital Nacional[[15]](#footnote-15)**, que es el plan de acción que el Gobierno Federal implementa para fomentar la adopción y desarrollo de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) e insertar a México en la sociedad de la información y el conocimiento.

El **artículo Décimo Cuarto Transitorio** de la misma reforma constitucional estableció que el Ejecutivo Federal tendrá a su cargo la política de inclusión digital universal, lo que no es óbice para que las autoridades estatales impulsen, en el ámbito de su competencia, el aprovechamiento de las tecnologías de la información y comunicaciones en la gestión pública, con la finalidad de instaurar en la entidad lo que se ha venido llamando Gobierno Digital.

**VIII.-** El **Plan Estatal de Desarrollo Chihuahua 2022-2027[[16]](#footnote-16)**, en especial, en el Eje Cinco denominado “Buen gobierno, cercano y con instituciones sólidas”, prevé la estrategia de “Simplificar los trámites y servicios otorgados por el Gobierno del Estado”, para lo cual contempla la línea de acción 11, consistente en “Consolidar el uso de las tecnologías de la información para modernizar y fortalecer los sistemas en el Gobierno del Estado para la digitalización de trámites y servicios estatales”.

Mejorar los servicios e información ofrecida a la ciudadanía constituye la razón para configurar un Gobierno moderno que haga del principio de eficacia y eficiencia su eje principal. La iniciativa en estudio busca generar un cambio profundo en todas las áreas de desarrollo del Estado, aprovechando las ventajas que las herramientas, tecnológicas nos ofrecen para fortalecer la gestión pública y el desarrollo social y económico.

El Gobierno Digital o Electrónico es un innovador sistema de administración pública, basado en el uso intensivo de las TIC que hace posible una forma de interacción distinta a la convencional entre los órganos del Estado y de éste con la ciudadanía, con la finalidad de incrementar los niveles de eficacia y eficiencia en el ejercicio gubernamental, que redunde en una mejor calidad de vida de las personas. Para instrumentar el Gobierno Digital resulta inminente establecer la regulación de intercambio de información por medios electrónicos y su plena validez jurídica.

El objetivo de la iniciativa que hoy se analiza, es incorporar las tecnologías de la información y comunicaciones a la vida de las personas y del propio gobierno, logrando una mayor inclusión digital, para contar con una ciudadanía mejor informada y más participativa; así como con un gobierno más cercano, abierto y eficaz.

La estrategia de “Gobierno Digital” persigue tres objetivos estratégicos:

1. Mejorar la provisión de servicios a la ciudadanía y las empresas: considera el establecimiento de nuevas formas de relación gobierno-ciudadanía que permitan al Estado brindar sus servicios en forma eficiente, eficaz, con calidad y con independencia de las variables de tiempo y espacio.
2. Fortalecer la transparencia del Estado y la participación ciudadana: se concentra en el fomento y la creación de mecanismos que permitan a la ciudadanía jugar un rol activo en el quehacer del país, abriendo nuevos espacios y formas de participación sustentada en gran parte por la publicidad de información.
3. Mejorar la eficiencia del Estado: busca la concepción y el establecimiento de procesos al interior de las entidades del Estado que permitan la integración de los sistemas de los diferentes servicios, compartir recursos y mejorar la gestión interna en las instituciones públicas y por consiguiente la eficiencia del Estado.

Con la regulación y promoción del desarrollo de un Gobierno Digital, se pretende agilizar, simplificar y hacer más accesibles todos los trámites y servicios que estén a cargo de la autoridad estatal y municipal.

Digitalizar a Chihuahua implicará dar mejor calidad en los servicios que presten las autoridades, reduciendo el tiempo en trámites y servicios gubernamentales, en favor de las y los chihuahuenses.

**IX.-** El proyecto de Ley que se pone a consideración de esa Soberanía comprende 179 artículos permanentes, integrados en 7 títulos, además de 20 artículos transitorios.

Tal como lo señala la iniciadora en la exposición de motivos correspondiente, dicho proyecto se desarrolla bajo la siguiente estructura:

**Título Primero Disposiciones Generales.** Contiene los objetivos, los sujetos de la norma, los conceptos y definiciones que se insertan en la ley, así como la facultad para la interpretación de la misma, desde el punto de vista administrativo.

**Título Segundo De los Derechos y Obligaciones de las y los Particulares en relación con el Gobierno Digital.** Plantea el cambio de paradigma de los derechos que tienen las y los particulares, en relación con la materia de gobierno digital, al establecer, el reconocimiento y no el otorgamiento de derechos, debiendo el Estado garantizar el ejercicio de dichas prerrogativas y exigir el cumplimiento de obligaciones que todo particular debe observar en el tenor de usar de manera adecuada y responsable, las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) que se pongan a su disposición.

**Título Tercero Del Marco Institucional en Materia de Gobierno Digital.** Establece el marco institucional que operará en la programación, implementación, ejecución y consolidación de la política de gobierno digital, al crearse el Consejo de Gobierno Digital, como el órgano colegiado rector de la materia al interior del Ejecutivo del Estado, conformado por las personas titulares de diversas instituciones. Al igual, se establecen las facultades, atribuciones y obligaciones que, conforme a la norma, deberán ejecutar las personas titulares de la Presidencia del Consejo, de la Secretaría Ejecutiva del mismo y de la Coordinación de Política Digital dependiente de la Secretaría de Coordinación de Gabinete.

A fin de promover la implementación de la citada política en el resto de órganos del Estado, se prevé que los poderes Judicial y Legislativo, así como los organismos autónomos, instituyan su propio Consejo u órgano colegiado similar, con atribuciones equivalentes a las previstas para el Consejo de Gobierno Digital del Poder Ejecutivo, cuyas acciones y disposiciones deberán estar acotadas al ente público correspondiente.

**Título Cuarto Del Gobierno Digital.** Destaca, las funciones que tienen los órganos del Estado en cuanto a su participación en la consolidación de una estrategia homologada en esta materia, así como las bases sobre las que se soporta la política pública en cuestión, a saber:

1. El Programa Especial de Gobierno Digital;
2. La Estrategia General para el Uso e Implementación de las Tecnologías de la Información y Comunicaciones dentro de los Órganos del Estado;
3. El Programa de Seguridad Informática para los Órganos del Estado de Chihuahua;
4. Los proyectos internos en materia de tecnologías de la información y comunicaciones de los órganos del Estado, y
5. Los convenios de portabilidad.

**Título Quinto De los Instrumentos Tecnológicos del Gobierno Digital.**  Establece los instrumentos tecnológicos que permitirán la concreción de la planeación, construcción, instrumentación, ejecución y consolidación de las políticas públicas en materia de gobierno digital, los cuales son los pilares fundamentales para que las y los particulares puedan ejercer su derecho a interactuar con los órganos del Estado, haciendo uso de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC). Ello, se refleja en la regulación sobre el uso de:

1. La firma electrónica avanzada;
2. Los portales informativos;
3. Los portales transaccionales;
4. El Registro de Certificados de Firma Electrónica Avanzada de las y los Servidores Públicos del Poder Ejecutivo del Estado de Chihuahua;
5. La ventanilla virtual;
6. Las aplicaciones móviles;
7. Las redes sociales institucionales;
8. Los sistemas de información estadística y geográfica;
9. El correo electrónico institucional; y
10. Los estrados digitales.

Cabe señalar que este Título recoge en su gran mayoría el contenido vigente de la Ley de Firma Electrónica Avanzada del Estado de Chihuahua, en lo que respecta a sujetos obligados, derechos y obligaciones, principios rectores, estructura de la firma electrónica avanzada, certificado electrónico, mensaje de datos y servicios de certificación.

**Título Sexto Del Software Libre y Código Abierto.**  Establece las bases y principios en materia de uso de software libre y código abierto, que se retoman casi en su totalidad de lo establecido en la Ley de Software Libre y Código Abierto del Estado de Chihuahua, al considerarse herramientas fundamentales para mejorar la gestión pública y la eficiencia en los servicios que se otorgan a la ciudadanía, aunado a un ahorro progresivo de recursos públicos. A su vez, las disposiciones vigentes en esta materia se armonizan con la nueva realidad que se genera con la publicación de la Ley de Gobierno Digital para el Estado de Chihuahua, permitiendo que los preceptos referentes a la creación e implementación de software libre y código abierto puedan ajustarse a la política pública en materia de gobierno digital que se está creando con este nuevo marco jurídico, motivo por el cual en el proyecto que se presenta se propone la abrogación de ese ordenamiento legal.

**Título Séptimo De las Responsabilidades y Medios de Defensa.** Prevé un apartado de responsabilidades y medios de defensa. En esta parte el proyecto las previsiones son mínimas, con referencias directas a los cuerpos normativos que regulan ambas materias; lo anterior, para evitar la sobrerregulación legislativa.

Finalmente, con el objetivo de que las autoridades que se mencionan en el presente proyecto tengan delimitadas de manera clara las funciones que les competen y con el fin de concentrar esfuerzos para la ejecución de las políticas públicas que aquí se esbozan, se abroga la Ley de Firma Electrónica Avanzada del Estado de Chihuahua y se reforma la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, en lo correspondiente a las atribuciones de la Secretaría de la Función Pública y la Secretaría de Coordinación de Gabinete.

En ese esquema, por lo que refiere a las atribuciones otorgadas a la Secretaría de la Función Pública, se elimina la atribución consistente en coordinar la estrategia de digitalización de los trámites y servicios de la Administración Pública Estatal y de las plataformas digitales para la estandarización y cumplimiento de las obligaciones de transparencia respectivas; así como consolidar el uso y aprovechamiento de las tecnologías de la información, para fomentar canales directos de vinculación con la ciudadanía, administrando a su vez la información generada, y en consecuencia, se otorga a la Secretaría de Coordinación de Gabinete la atribución de coordinar la estrategia de digitalización de los trámites, servicios, procesos y procedimientos de la Administración Pública Estatal, así como la implementación de las plataformas digitales que para esto se requieran.

**X.-** El desarrollo del Gobierno Digital se asume como un proceso gradual, evolutivo y colectivo entre todos los organismos de la administración pública, ante esta realidad, los gobiernos de todo el mundo se han enfrentado al reto que plantea incorporar los nuevos métodos de trabajo que las tecnologías de la información ofrecen, con el propósito de convertirse en precursores de una nueva cultura digital que comprenda a relaciones multilaterales entre la ciudadanía, empresas y gobierno a través de internet. Chihuahua no es la excepción.

 Conscientes de que el acceso a la información y a la conectividad son instrumentos democráticos de incalculable valor, que le brindan transparencia, agilidad y eficiencia, y facilitan la atribución de responsabilidad en la gestión gubernamental, debemos emprender acciones concretas en esta dirección, las cuales forman parte de un proyecto de Gobierno Digital. Estos esfuerzos deben promover el objetivo fundamental de acelerar los efectos positivos que los cambios en la sociedad de la información derivan, gestionando el desarrollo y mantenimiento de las distintas herramientas de comunicación del gobierno para con sus ciudadanas y ciudadanos.

En tiempos actuales, una sólida infraestructura gubernamental de tecnologías de la información es un requisito esencial para desarrollar y mantener la competitividad necesaria en la economía globalizada a la cual nos enfrentamos, por lo que debemos coadyuvar con el gobierno en su intención de invertir grandes esfuerzos en la actualización de sus sistemas de comunicación. Tales esfuerzos deben contener medidas dirigidas a beneficiar la relación del gobierno con ciudadanía y empresas, las relaciones intergubernamentales y a promover la toma de decisiones informadas a la hora de establecer política pública.

Chihuahua tiene la gran oportunidad de unirse a países de primer mundo que cuentan con programas similares reconocidos por organismos internacionales como líderes en la incorporación de tecnología informática a la gestión pública.

En ese sentido, debemos proveerle a la sociedad chihuahuense las herramientas que garanticen un marco jurídico mínimo indispensable que permita a los diversos agentes involucrados a su vez, desarrollarse y contribuir con el avance de las nuevas tecnologías, pues estamos conscientes de que tanto los tres poderes de gobierno, así como los ayuntamientos deben constituirse en facilitadores respecto de la comunicación interinstitucional, mediante el intercambio y acceso a la información vía internet; por ello se hace sumamente necesario e inminente la regulación de las modalidades de intercambio de información por medios electrónicos.

El presente dictamen, que contiene la Ley de Gobierno Digital para el Estado de Chihuahua constituye una herramienta útil para enfrentar los nuevos retos que plantea la gobernabilidad. Debemos, como legisladoras y legisladores tomar acciones que puedan proveerle a las y los chihuahuenses una oficina virtual abierta 24 horas al día, 7 días a la semana, 365 días al año, en donde tengan a su disposición información sobre los servicios, formularios para solicitar servicios, entrega en línea de formularios, presentación en línea de solicitudes, pago de derechos y comprobantes, respuestas a sus solicitudes de servicio, la posibilidad de presentar quejas y denuncias ante las distintas entidades, así como la creación de foros para opinar sobre la calidad de los servicios recibidos.

Al haber una serie de plataformas digitales que faciliten la petición de trámites y servicios en cualquier lugar y en cualquier momento, no habiendo necesidad de acudir a las oficinas de los poderes estatales o de los organismos autónomos, se podrá tener una mayor eficiencia por parte de los órganos del Estado en cuanto a la atención que necesita la ciudadanía para efecto de poder llevar a cabo sus requerimientos. Además, se estarán erradicando actos de corrupción, pues se reducirá la interacción física.

Conjuntamente, el establecimiento de una plataforma digital tiene como ventajas un mayor control de los oficios que llegan a cada una de las dependencias por parte de la ciudadanía y el funcionariado, incrementará la eficiencia en los tiempos de respuesta, reducirá significativamente los costos de papelería e impresión de cada dependencia, y asegurará una mayor transparencia en el manejo de la información gubernamental. Asimismo, esta herramienta tecnológica innovadora permitirá generar una cultura sensible con el medio ambiente en la disminución en el uso de papel, aprovechando al máximo los beneficios que ofrecen las tecnologías de la información y la comunicación (TIC).

Conviene precisar que con este nuevo ordenamiento jurídico, no se pretende eliminar en el corto plazo los servicios y trámites que actualmente se llevan a cabo en forma presencial ante las dependencias estatales y municipales, pero sí representa una opción moderna para que la ciudadanía tenga mayor acceso a la resolución de su problemática individual y social, sin detrimento de las formalidades que la ley imponga, en todos aquellos aspectos que sean susceptibles de cumplimiento por medios electrónicos.

Quienes integramos esta Comisión de Dictamen Legislativo, por las consideraciones de hecho y de Derecho que han quedado antes vertidas, estimamos oportuna, viable, necesaria e imprescindible la expedición de la Ley de Gobierno Digital para el Estado de Chihuahua, por tratarse de un ordenamiento acorde a los postulados de la Organización de las Naciones Unidas que define el uso de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) como un mecanismo para proveer a la ciudadanía información del gobierno de manera eficiente, mejores servicios y para que la gente participe en la toma de decisiones de las políticas públicas.

Por lo anteriormente expuesto, la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, somete a la consideración del Pleno el presente dictamen con carácter de:

**DECRETO**

**ARTÍCULO PRIMERO**.- Se expide la Ley de Gobierno Digital para el Estado de Chihuahua, para quedar como sigue:

**LEY DE GOBIERNO DIGITAL PARA EL ESTADO DE CHIHUAHUA**

**TÍTULO PRIMERO**

**DISPOSICIONES GENERALES**

**CAPÍTULO ÚNICO**

**Artículo 1.** Esta Ley es de orden público, de interés y de observancia general dentro del Estado de Chihuahua y tiene como objetivos:

1. Reconocer los derechos con los que cuentan las y los particulares en relación con el gobierno digital que deriven de la ejecución de esta Ley.
2. Establecer el marco institucional sobre el que se basará la construcción, instrumentación, implementación, ejecución y consolidación de un gobierno digital.
3. Constituir el marco de referencia sobre el que recaerá la planificación, así como las estrategias, programas y acciones que se deberán seguir en la implementación y en el fortalecimiento del gobierno digital.
4. Promover la institucionalización y consolidación del gobierno digital y del uso estratégico de las TIC como el instrumento preponderante que permitirá la apertura gubernamental.
5. Establecer los lineamientos generales que se deberán observar para la construcción, instrumentación, implementación, ejecución y consolidación del gobierno digital por parte de los órganos del Estado.
6. Optimizar la gestión de trámites, servicios, procesos y procedimientos administrativos y jurisdiccionales, comunicaciones y de cualquier acto administrativo con el fin de que los mismos puedan realizarse haciendo uso de las TIC.
7. Fomentar la transparencia en las funciones que realicen los órganos del Estado, al consolidar el uso de herramientas tecnológicas que permitan un fácil acceso a la información pública y a las funciones que realizan dentro de su respectivo ámbito de competencia.
8. Establecer mecanismos de acercamiento entre las y los particulares y los órganos del Estado para mejorar la prestación de trámites y servicios de las instituciones públicas, haciendo uso de instrumentos tecnológicos, así como de plataformas digitales y redes sociales.

Las disposiciones de esta Ley y los principios de gobierno digital que aquí se establecen, no serán aplicables a aquellas materias que se regulen por su propio ordenamiento legal, únicamente en los preceptos que se opongan al mismo.

**Artículo 2.** En la planeación, presupuestación, instrumentación, ejecución y consolidación de las políticas, programas, estrategias, acciones y soluciones en materia de gobierno digital, los órganos del Estado deberán observar el cumplimiento de los siguientes principios:

1. **Apertura:** El uso de las TIC tiene como finalidad ser una vía de comunicación entre las y los particulares y los órganos del Estado, facilitando la interacción entre estos.
2. **Conservación:** Los mensajes de datos y documentos digitales deben contar con el tratamiento que les permita perdurar en el tiempo, haciendo uso de los medios que resulten necesarios para evitar su alteración o su falsificación.
3. **Entera fe y crédito:** Los mensajes de datos y documentos digitales emitidos por un ente público o persona fedataria pública de otra Entidad Federativa o por órganos federales, por motivo de la realización de un trámite, servicio, proceso o procedimiento jurisdiccional o administrativo, comunicación o cualquier otro acto, en el que se haga uso de las TIC; cuenta con plena validez dentro del Estado.
4. **Inclusión:** Toda persona tiene el derecho de interactuar con los órganos del Estado haciendo uso de las TIC, debiendo dichos sujetos, implementar políticas públicas para garantizar esta prerrogativa, sin discriminación alguna de las personas que ejerzan ese derecho.
5. **Legalidad:** Aquellos actos emanados de las funciones y atribuciones que la Ley le encomienda a las y los servidores públicos de los órganos del Estado y que se realicen a través del uso de las TIC son plenamente válidos, siempre que, dentro de dicho procedimiento se sigan las reglas, bases y principios consagrados en esta Ley.
6. **Progresividad:** Una vez que los órganos del Estado pongan a disposición de las y los particulares la gestión, sustanciación y resolución de manera digital de un trámite, servicio, proceso o procedimiento administrativo o jurisdiccional, comunicación u otro acto que se encuentre bajo su competencia, no podrán bajo ninguna circunstancia, salvo por cuestiones de caso fortuito o fuerza mayor, impedir que dicho acto pueda ser solicitado y sustanciado haciendo uso de las TIC.
7. **No repudio:** Ningún órgano del Estado podrá argumentar que las resoluciones que devengan de la realización de un trámite, servicio, proceso o procedimiento administrativo, comunicación o cualquier otro acto realizado por medio del uso de las TIC son inválidos; otorgando pleno reconocimiento a las actuaciones realizadas de manera digital, por medio de Portales Transaccionales.
8. **Transparencia:** El uso de las TIC permite contar con una gestión pública que pueda ser supervisada por la ciudadanía al poder obtenerse información en formato de datos abiertos, para la toma de decisiones tanto en el sector público, privado, social y académico.

**Artículo 3.** Son sujetos de esta Ley:

1. El Poder Ejecutivo Estatal.
2. El Poder Legislativo Estatal.
3. El Poder Judicial Estatal.
4. Los municipios.
5. Los organismos con autonomía constitucional y legal.
6. Las y los particulares.
7. Las y los prestadores de servicio de certificación.

Los Poderes Legislativo y Judicial del Estado, los municipios, así como los organismos autónomos contribuirán, en el ámbito de su competencia, a la consecución de los objetivos de esta Ley y a la implementación del gobierno digital a través del diseño y ejecución de programas y acciones al interior de sus instituciones, las que se apegarán, en lo conducente, a las disposiciones y principios de esta Ley.

**Artículo 4.** Los órganos del Estado quedan facultados para la celebración de convenios de colaboración, coordinación, concertación, acuerdos interinstitucionales o asociación entre sí o con las autoridades del ámbito internacional, federal, estatal, municipal, de otras entidades federativas, con municipios o alcaldías de otras entidades federativas, así como con instituciones del ámbito privado y social; que tengan como finalidad la ejecución y realización de las atribuciones que esta Ley le encomienda.

**Artículo 5.** Los órganos del Estado ejecutarán las disposiciones que establece esta Ley mediante las áreas o unidades administrativas que estos determinen, en lo que no se oponga a los ordenamientos legales que los rigen, sujetándose a sus propias instancias, procedimientos y mecanismos de control.

**Artículo 6.** Para los efectos de la presente Ley se entenderá por:

1. **Arquitectura de gobierno digital:** Marco de referencia adoptado por los órganos del Estado en el que se establecerá el diseño de los servicios, protocolos de toma de decisiones y priorización de realización de proyectos en materia de gobierno digital.
2. **Autenticidad:** Característica que permite conocer si un mensaje de datos o documento digital fue emitido por la persona o instancia facultada para ello, y reconocer de manera plena su contenido y las consecuencias jurídicas que deriven de él, al considerarse una manifestación de la voluntad de su emisor.
3. **Autoridad certificadora:** En singular o en plural, autoridades federales y dependencias y entes de los órganos del Estado que, conforme a las disposiciones jurídicas, tengan reconocida esta calidad y cuenten con la infraestructura tecnológica para la emisión, administración y registro de certificados de firma electrónica avanzada, para proporcionar servicios relacionados con esta, así como del procedimiento referente a la acreditación de las prestadoras de servicios de certificación, de conformidad con lo establecido en esta Ley, su Reglamento y en las disposiciones de carácter administrativo que se expidan.
4. **Cadena de firma electrónica avanzada:** Clave o código alfanumérico generado al realizar el signado de mensajes de datos o documentos digitales y que se estampa dentro de él, otorgando plena validez de su suscripción, de la identidad de quien lo firmó, así como de la información referente al momento en el que se realizó dicha acción.
5. **Certificado de firma electrónica avanzada:** En singular o en plural, documento emitido de manera electrónica por la autoridad certificadora o prestadora de servicios de certificación, mediante el cual se confirma el vínculo existente entre la o el firmante y sus datos de creación de firma electrónica avanzada, a través de los datos de verificación de firma en él contenidos.
6. **Consejo:** Consejo de Gobierno Digital.
7. **Conservación:** Existencia permanente de los datos e información que, contenidos en un mensaje de datos o documento digital y asentados o intercambiados a través de portales transaccionales, aplicaciones móviles y ventanilla virtual, son susceptibles de reproducción.
8. **Coordinación:** Coordinación de Política Digital, dependiente de la Secretaría de Coordinación de Gabinete.
9. **CURP:** Clave Única de Registro de Población.
10. **Datos abiertos:** Datos digitales de carácter público que son accesibles en línea que pueden ser usados, reutilizados y redistribuidos por cualquier persona interesada y que tienen las siguientes características:
11. Accesibles: Los datos están disponibles para la gama más amplia de personas usuarias, para cualquier propósito.
12. Integrales: Contienen el tema que describen a detalle y con los metadatos necesarios.
13. Gratuitos: Se obtienen sin entregar a cambio contraprestación alguna.
14. No discriminatorios: Los datos están disponibles para cualquier persona, sin necesidad de registro.
15. Oportunos: Son actualizados periódicamente conforme se generen.
16. Permanentes: Se conservan en el tiempo, para lo cual las versiones históricas relevantes para uso público se mantendrán disponibles con identificadores adecuados al efecto.
17. Primarios: Provienen de la fuente de origen con el máximo nivel de desagregación posible.
18. Legibles por máquinas: Deberán estar estructurados, total o parcialmente, para ser procesados e interpretados por equipos digitales de manera automática.
19. En formatos abiertos: Los datos estarán disponibles con el conjunto de características técnicas y de presentación que corresponden a la estructura lógica usada para almacenar datos en un archivo digital, cuyas especificaciones técnicas están disponibles públicamente, que no suponen una dificultad de acceso y que su aplicación y reproducción no estén condicionadas a contraprestación alguna.
20. De libre uso: Citan la fuente de origen como único requerimiento para ser utilizados libremente.
21. **Datos de creación de firma electrónica avanzada:** Cadena de bits o datos únicos que la o el firmante genera de manera secreta y utiliza para crear su firma electrónica avanzada, a fin de lograr el vínculo entre dicha herramienta y la persona firmante.
22. **Datos personales:** Datos personales y los datos personales sensibles definidos en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de los Sujetos Obligados.
23. **Dependencias y entidades:** Aquellas que conforman la Administración Pública Centralizada y Paraestatal del Poder Ejecutivo.
24. **Destinatario:** Persona designada por la o el firmante para recibir el mensaje de datos o documento digital, pero que no esté actuando como intermediaria con respecto a dicho mensaje.
25. **Documento digital:** Instrumentos escritos con caracteres alfanuméricos, archivo de imagen, video, audio o cualquier otro formato tecnológicamente disponible, que contenga aquella información o datos en los que se pueda constatar la realización de un hecho o acto jurídico y que puede ser o haya sido creado, transferido, almacenado o inteligido haciendo uso de las TIC.
26. **Domicilio electrónico:** Dirección de correo electrónico habilitada por las y los particulares o por el Poder Ejecutivo para efecto de recibir cualquier tipo de notificaciones o de documentos.
27. **Estándares:** Documento técnico que prevé un uso común y repetido de reglas, especificaciones, atributos, métodos de prueba y marcos de referencia aplicables que permitirán contar con una unificación de criterios para la construcción de portales informativos, portales transaccionales, aplicaciones móviles y demás instrumentos tecnológicos creados por los órganos del Estado.
28. **Estrategia General de TIC:** Estrategia General para el Uso e Implementación de las Tecnologías de la Información y Comunicaciones dentro del Poder Ejecutivo;
29. **Expediente digital:** En singular o en plural, conjunto de documentos digitales, mensajes de datos, metadatos y demás información que pueden ser utilizados por el Poder Ejecutivo en la sustanciación de trámites, servicios, procesos y procedimientos administrativos, comunicaciones y demás actos que se encuentren bajo su competencia; así como por las y los particulares para aquellos casos o circunstancias que así convengan a sus intereses.
30. **Fecha electrónica:** Conjunto de datos que en forma electrónica sean generados por un instrumento tecnológico para hacer constar el día y la hora en que un mensaje de datos o documento digital es enviado por la o el firmante o recibido por el destinatario.
31. **Firma electrónica avanzada:** Conjunto de datos y caracteres que constituyen la identificación oficial electrónica, permitiendo la identificación plena del firmante, que ha sido creada por medio del uso de las TIC bajo su exclusivo control, de manera que está vinculada únicamente al firmante y a los datos a los que se refiere, lo que permite que sea detectable cualquier modificación ulterior de estos y que produce los mismos efectos jurídicos que la firma autógrafa.
32. **Firmante:** Persona que actúa en nombre propio y que utiliza la firma electrónica avanzada para signar mensajes de datos o documentos digitales.
33. **Gobierno digital:** Política pública integral que tiene como finalidad la organización, planeación, presupuestación, instrumentación, ejecución y consolidación de las políticas, programas, estrategias, acciones y soluciones que plantean como objetivo principal el uso estratégico de las TIC dentro de las funciones y atribuciones de los órganos del Estado, fomentando la apertura de las instituciones públicas, así como la eficiencia de los mecanismos de gestión de los trámites, servicios, procesos y procedimientos administrativos, comunicaciones y demás actos que se encuentran dentro de la competencia de los órganos.
34. **Instituto:** Instituto de Innovación y Competitividad del Estado de Chihuahua.
35. **Interoperabilidad:** Característica que guardan las TIC para ser compatibles entre sí y que les permite comunicarse de manera rápida y eficiente.
36. **Ley:** Ley de Gobierno Digital para el Estado de Chihuahua.
37. **Mensaje de datos:** Información generada, enviada, archivada o comunicada a través de las TIC y que puede contener documentos digitales.
38. **Órganos del Estado:** Los sujetos establecidos en las fracciones I a V del artículo 3 de esta Ley.
39. **Portal informativo:** En singular o en plural, el espacio de una red informática que presenta, de acuerdo con las obligaciones en materia de transparencia, el acceso a la información que los órganos del Estado ofrecen a las y los particulares.
40. **Portal transaccional:** En singular o en plural, el espacio de una red informática por medio del cual se pueden realizar interacciones entre los órganos del Estado y las y los particulares, los órganos entre sí, con la finalidad de solicitar, gestionar, sustanciar y obtener la resolución de cualquier trámite, servicio, proceso o procedimiento administrativo o jurisdiccional, comunicación o cualquier otro acto que se encuentra dentro del ámbito de su competencia.
41. **Prestadora de servicios de certificación**: Las instituciones públicas conforme a las leyes que les son aplicables, así como las personas titulares de notarías o corredurías públicas y las personas morales de carácter privado que sean reconocidas con tal carácter para prestar servicios relacionados con la firma electrónica avanzada y, en su caso, expedir certificados electrónicos.
42. **Programa:** Programa Especial de Gobierno Digital.
43. **Programa de Seguridad Informática:** Programa de Seguridad Informática para el Poder Ejecutivo del Estado de Chihuahua.
44. **Proyecto interno:** En singular o en plural, los proyectos internos en materia de TIC de los órganos del Estado.
45. **Registro de Certificados:** Registro de Certificados de Firma Electrónica Avanzada de las y los Servidores Públicos del Poder Ejecutivo del Estado de Chihuahua.
46. **Reglamento:** Reglamento de la Ley de Gobierno Digital para el Estado de Chihuahua.
47. **RFC:** Clave del Registro Federal de Contribuyentes, expedida por el Servicio de Administración Tributaria.
48. **Secretaría:** Secretaría de Coordinación de Gabinete.
49. **Secretaría Ejecutiva:** Secretaría Ejecutiva del Consejo.
50. **Secretaría Técnica:** Secretaría Técnica del Consejo.
51. **SIG:** En singular o plural, los Sistemas de Información Estadística y Geográfica.
52. **Sitio web:** Espacio en internet en el que se contiene información, aplicaciones y cualquier otro elemento que permita obtener datos o interactuar con otras personas, por medio del uso de TIC.
53. **Software:** Soporte lógico de un sistema informático que comprende el conjunto de componentes lógicos necesarios para hacer la realización de tareas específicas, en contraposición a los componentes físicos que son llamados hardware.
54. **Software libre y código abierto**: Los programas de cómputo cuya licencia garantiza a la persona usuaria final el acceso al código fuente del programa y lo autoriza a ejecutarlo con cualquier propósito, modificarlo y redistribuir copias tanto del programa original como de sus modificaciones, en las mismas condiciones de licenciamiento acordadas al programa original.
55. **TIC:** Las Tecnologías de la Información y Comunicaciones, que son herramientas físicas y digitales vistas como un conjunto de elementos y técnicas que permiten su uso en el tratamiento y transmisión de información a través de medios digitales, utilizando la informática, internet u otras comunicaciones.
56. **Titular:** La persona a cuyo favor se expide un certificado de firma electrónica avanzada.
57. **Ventanilla virtual:** Sitio web donde se puede obtener información pública y se pueden llevar a cabo los trámites y servicios de los órganos del Estado en forma digital y automatizada.

**Artículo 7.** La interpretación administrativa de la presente Ley y las demás disposiciones que de ella emanen, así como la expedición de lineamientos, manuales de operación y demás instrumentos, estará a cargo de la Secretaría.

**TÍTULO SEGUNDO**

**DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LAS Y LOS PARTICULARES EN RELACIÓN CON EL GOBIERNO DIGITAL**

**CAPÍTULO ÚNICO**

**Artículo 8.** Se reconoce el derecho que tienen las y los particulares para interactuar con los órganos del Estado, a través del uso de las TIC, y el deber que tienen dichos entes de respetar, proteger y garantizar el ejercicio de este derecho.

**Artículo 9.** Las y los particulares que ejerzan el derecho a interactuar con los órganos del Estado, haciendo uso de las TIC, deberán observar el cumplimiento de las siguientes obligaciones:

1. Utilizar la firma electrónica avanzada en aquellos actos realizados por medio de portales transaccionales y aplicaciones móviles, en los que sea necesaria la manifestación de la voluntad de quien los solicita o los gestiona, con la finalidad de que se pueda autentificar su identidad.
2. Evitar la realización de cualquier acto u omisión que vulnere o ponga en riesgo la seguridad informática de los portales informativos, portales transaccionales, aplicaciones móviles y demás instrumentos tecnológicos puestos a disposición de las y los particulares por parte de los órganos del Estado.
3. Evitar la comisión de cualquier acto u omisión que vulnere o ponga en riesgo la protección de los datos personales de aquellas personas que utilizan los portales informativos, portales transaccionales, aplicaciones móviles y demás instrumentos tecnológicos puestos a disposición de las y los particulares por parte de los órganos del Estado.
4. Evitar el uso de documentos físicos y digitales falsos o de aquellos que presenten alguna alteración en cuanto a su forma o contenido.
5. Sujetar su actuación a las reglas establecidas en esta Ley, su Reglamento y en demás disposiciones, lineamientos e instrumentos emitidos por el Consejo.

**TÍTULO TERCERO**

**DEL MARCO INSTITUCIONAL EN MATERIA DE GOBIERNO DIGITAL**

**CAPÍTULO PRIMERO**

**DEL CONSEJO**

**SECCIÓN PRIMERA**

**DE LA ORGANIZACIÓN, FUNCIONAMIENTO Y ATRIBUCIONES DEL CONSEJO**

**Artículo 10.** Se crea el Consejo como el órgano colegiado rector de la política estatal de gobierno digital, encargado de la promoción, diseño, aprobación, vigilancia y evaluación de las políticas, programas, estrategias, acciones y soluciones en materia de gobierno digital que deberán ejecutar las dependencias y entidades del Ejecutivo dentro de su respectivo ámbito de competencia, de acuerdo con las bases establecidas en esta Ley y su Reglamento.

**Artículo 11.** El Consejo estará integrado por las personas titulares de:

1. El Poder Ejecutivo, quien ocupará la Presidencia.
2. La Secretaría, quien ocupará la Secretaría Ejecutiva.
3. La Coordinación, quien ocupará la Secretaría Técnica.
4. Vocales, que serán las personas titulares de:
	1. La Secretaría General de Gobierno.
	2. La Secretaría de Hacienda.
	3. La Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico.
	4. La Secretaría de la Función Pública.
	5. La Secretaría de Seguridad Pública.
	6. La Fiscalía General del Estado.
	7. La Dirección General del Instituto.
5. Personas invitadas permanentes, que serán las titulares de:
	1. La Dirección General del Instituto de Apoyo al Desarrollo Tecnológico.
	2. La Presidencia del Instituto Chihuahuense para la Transparencia y Acceso a la Información Pública.

Quienes integren el Consejo contarán con voz y voto en el desahogo de los asuntos, excepto las personas invitadas permanentes, quienes contarán únicamente con voz.

Los Poderes Legislativo y Judicial y los organismos autónomos, conformarán su respectivo consejo u órgano colegiado en materia de gobierno digital, que contará con atribuciones equivalentes a las del Consejo, para la implementación de la política pública del gobierno digital en el ámbito de su respectiva competencia.

**Artículo 12.** El Consejo sesionará de forma ordinaria dos veces al año y de forma extraordinaria las veces que sean necesarias a juicio de la Presidencia, previa convocatoria de la Secretaría Técnica, con una anticipación de cinco días hábiles en el caso de las ordinarias, y de dos días hábiles, si se trata de las extraordinarias.

La respectiva convocatoria deberá realizarse por escrito y entregarse en el domicilio o correo electrónico registrado por quienes integran el Consejo.

El Consejo sesionará válidamente con la asistencia de por lo menos la mitad más uno de sus integrantes. Las resoluciones se tomarán por mayoría simple de sus integrantes asistentes; en caso de empate, la Presidencia contará con el voto de calidad.

De cada sesión, la Secretaría Técnica levantará un acta en la cual se asentará una síntesis de las discusiones y de los acuerdos tomados por el Consejo. Las actas deberán ser firmadas por quienes integran el Consejo que hayan asistido a la sesión correspondiente.

Cada persona que integre el Consejo designará una suplente quien tendrá las mismas atribuciones y obligaciones de su titular. Las y los suplentes designados deberán ostentar un cargo inmediato inferior al de la persona titular.

Quien presida el Consejo solo podrá suplirse por la persona que ocupe la Secretaría Ejecutiva del mismo. En este caso, quien ocupe la titularidad de la Secretaría Ejecutiva deberá nombrar a quien le sustituirá en el cargo, conforme a lo establecido en el párrafo anterior.

La persona titular de la Presidencia del Consejo y de la Secretaría Técnica podrán invitar a las sesiones de dicho órgano, a especialistas en la materia de gobierno digital de los sectores público, privado, social y académico, quienes tendrán derecho a voz, pero no a voto.

Los cargos de quienes integran el Consejo serán honoríficos.

**Artículo 13.** El Consejo tendrá las siguientes atribuciones:

1. Proponer a la dependencia competente las disposiciones, lineamientos y demás instrumentos que deriven de esta Ley y su Reglamento, que permitan la planeación, presupuestación, instrumentación, ejecución y consolidación de las políticas, programas, estrategias, acciones y soluciones relacionadas con la materia de gobierno digital; y solicitar su publicación en el Periódico Oficial del Estado cuando sean disposiciones de carácter general.
2. Establecer los esquemas de coordinación, colaboración, concertación y asociación que deberán seguir las dependencias y entidades, en la implementación de las políticas, programas, estrategias, acciones y soluciones en materia de gobierno digital.
3. Colaborar con las instituciones del ámbito federal, estatal y municipal, de otras entidades federativas, de municipios o alcaldías de otras entidades federativas y del sector privado, social o académico, para la realización de todas aquellas actividades y funciones que lleven a la plena implementación de las políticas, planes, programas, estrategias, acciones y soluciones en materia de gobierno digital.
4. Someter a consideración de la persona titular del Poder Ejecutivo el proyecto de reglamento de esta Ley.
5. Aprobar y emitir los instrumentos jurídicos y técnicos que permitan la construcción, implementación y puesta en marcha de los portales informativos, portales transaccionales, aplicaciones móviles y demás instrumentos tecnológicos habilitados por parte de las dependencias y entidades.
6. Presentar ante la persona titular del Poder Ejecutivo, por conducto de la Secretaría de Hacienda, en los tiempos establecidos en las leyes de la materia, la partida presupuestal que se estime que debe destinarse para la ejecución de las políticas, programas, estrategias, acciones y soluciones en materia de gobierno digital en cada ejercicio fiscal.
7. Aprobar el Programa.
8. Aprobar la Estrategia General de TIC y solicitar su publicación en el Periódico Oficial del Estado.
9. Supervisar la correcta planeación, presupuestación, instrumentación, ejecución y consolidación de los proyectos internos y demás políticas, programas, estrategias, acciones y soluciones en materia de gobierno digital, portales informativos, portales transaccionales, aplicaciones móviles y demás instrumentos tecnológicos habilitados por el Gobierno del Estado, de acuerdo con los principios establecidos en esta Ley, su Reglamento y en demás disposiciones, lineamientos e instrumentos emitidos por el Consejo.
10. Recibir el informe de actividades que realice la Secretaría Técnica.
11. Emitir recomendaciones y criterios a las dependencias y entidades que tengan como finalidad la correcta planeación, presupuestación, instrumentación, ejecución y consolidación de las políticas, programas, estrategias, acciones y soluciones en materia de gobierno digital por parte de dichos entes.
12. Recibir los proyectos internos que las dependencias y entidades sometan a su consideración y orientar a dichos entes en la elaboración e implementación de los mismos.
13. Promover el uso de las TIC dentro de los trámites, servicios, procesos administrativos o jurisdiccionales, comunicaciones y demás actos que se encuentren bajo la competencia de las dependencias y entidades, a través de los canales de comunicación y de divulgación que el Consejo estime pertinentes.
14. Promover el respeto, protección y las garantías que permitan que las y los particulares puedan ejercer el derecho que tienen a interactuar con las dependencias y entidades a través del uso de las TIC, estableciendo las políticas, programas, estrategias, acciones y soluciones que el Consejo estime pertinentes, bajo los principios consagrados en esta Ley, su Reglamento y demás disposiciones legales aplicables.
15. Apoyar a las dependencias y entidades en los procesos que lleven a la planeación, presupuestación, instrumentación, ejecución y consolidación de las políticas, programas, estrategias, acciones y soluciones en materia de gobierno digital por parte de dichas instituciones.
16. Promover en coordinación con las autoridades estatales en materia de desarrollo económico, el establecimiento de empresas y negocios relacionados con el sector de las TIC.
17. Proponer a las dependencias y entidades, la adopción de mejores prácticas en materia de uso de TIC dentro de sus procesos internos, así como en los trámites, servicios, procesos y procedimientos administrativos, comunicaciones y en cualquier acto que se encuentre bajo su competencia.
18. Presentar ante la persona titular del Poder Ejecutivo, el proyecto de reformas a esta Ley y demás ordenamientos legales y reglamentarios que considere necesarios para la consolidación del gobierno digital en el Poder Ejecutivo.
19. Colaborar con las autoridades de mejora regulatoria para la instrumentación de políticas, planes, programas, estrategias, acciones y soluciones que permitan una sinergia entre dicha materia y el uso de TIC dentro de los trámites, servicios, procesos y procedimientos administrativos, comunicaciones y en cualquier acto que se encuentre bajo la competencia de las dependencias y entidades en materia de gobierno digital.
20. Aprobar el Programa de Seguridad Informática y solicitar su publicación en el Periódico Oficial del Estado.
21. Expedir los lineamientos, políticas, procedimientos y mecanismos que deberán seguir las autoridades certificadoras, así como las prestadoras de servicios de certificación, en cuanto al cumplimiento de la prestación de los servicios que establece esta Ley, en el ámbito de su competencia.
22. Las demás que le confiera esta Ley, su Reglamento y demás disposiciones legales aplicables.

**SECCIÓN SEGUNDA**

**DE LAS FACULTADES DE LA PRESIDENCIA DEL CONSEJO**

**Artículo 14.** La Presidencia del Consejo, contará con las siguientes atribuciones:

1. Llevar el orden de las sesiones procurando el respeto entre las personas integrantes del Consejo.
2. Auxiliarse de la Secretaría Técnica para aquellas cuestiones que estime pertinentes dentro de las sesiones del órgano colegiado, así como en aquellas que resulten necesarias para el pleno ejercicio de su función.
3. Representar al Consejo en aquellos actos que resulten necesarios.
4. Conducir las relaciones interinstitucionales del Consejo con los demás órganos del Estado, y demás instituciones del ámbito internacional, federal, estatal y municipal, de otras entidades federativas, de municipios o alcaldías de otras entidades federativas; así como con organizaciones del sector público, privado, social y académico.
5. Emitir la convocatoria a sesión extraordinaria del Consejo, cuando las circunstancias del caso así lo ameriten.
6. Suscribir, a nombre del Consejo, aquellos instrumentos de colaboración, coordinación, concertación y asociación que permitan la correcta planeación, presupuestación, instrumentación, ejecución y consolidación de las políticas, planes, programas, estrategias, acciones y soluciones en materia de gobierno digital.
7. Las demás que le confiera esta Ley, su Reglamento y demás disposiciones, lineamientos e instrumentos emitidos por el Consejo.

**SECCIÓN TERCERA**

**DE LAS ATRIBUCIONES DE LA SECRETARÍA EJECUTIVA**

**Artículo 15.** La Secretaría Ejecutiva tendrá las siguientes atribuciones:

1. En ausencia de la Presidencia propietaria, presidir las sesiones del Consejo.
2. Dar seguimiento a las disposiciones y acuerdos del Consejo.
3. Auxiliar a la Presidencia del Consejo en aquellos asuntos que esta le encomiende.
4. Las demás que le confiera la presente Ley, su Reglamento y las que provengan de acuerdos del Consejo.

**SECCIÓN CUARTA**

**DE LAS ATRIBUCIONES DE LA SECRETARÍA TÉCNICA DEL CONSEJO**

**Artículo 16.** La Secretaría Técnica tendrá las siguientes atribuciones:

1. Auxiliar a la Presidencia y a la Secretaría Ejecutiva del Consejo en aquellos asuntos que estas le encomienden.
2. Presentar y rendir un informe de actividades ante el Consejo sobre el estado que guarda la implementación y operación de la política de gobierno digital en el Poder Ejecutivo, en la primera reunión ordinaria del año posterior inmediato.
3. Facilitar a las dependencias y entidades, cuando así lo soliciten, los documentos, información y datos que se encuentren relacionados con la planeación, presupuestación, instrumentación, ejecución y consolidación de las políticas, programas, estrategias, acciones y soluciones relacionadas con la materia de gobierno digital.
4. Elaborar el proyecto de las demás disposiciones, lineamientos e instrumentos que permitan la planeación, presupuestación, instrumentación, ejecución y consolidación de las políticas, planes, programas, estrategias, acciones y soluciones relacionadas con la materia de gobierno digital y someterlas a consideración del Consejo, para su aprobación.
5. Asesorar a las dependencias y entidades en aquellas actividades relacionadas con la planeación, presupuestación, instrumentación, ejecución y consolidación de las políticas, planes, programas, estrategias, acciones y soluciones que tengan como finalidad la implementación de las TIC dentro de los trámites, servicios, procesos, procedimientos administrativos o jurisdiccionales, comunicaciones y demás actos que estas realicen en el ámbito de su competencia.
6. Colaborar con los demás órganos del Estado en la difusión y promoción del uso de las TIC en la interacción con las y los particulares.
7. Apoyar a las dependencias y entidades en la integración dentro de la ventanilla virtual, de los trámites, servicios, procesos y procedimientos administrativos y jurisdiccionales, comunicaciones y demás actos que se encuentran bajo su competencia, así como de la información relacionada con ellos.
8. Elaborar los instrumentos jurídicos y técnicos que permitan la construcción, implementación y puesta en marcha de los portales informativos, portales transaccionales, aplicaciones móviles y demás instrumentos tecnológicos por parte de las dependencias y entidades y someterlos a la consideración del Consejo.
9. Elaborar los documentos necesarios, en los que se establezca la partida presupuestal y someterla a consideración del Consejo.
10. Elaborar el Programa y someterlo a consideración del Consejo, para su aprobación.
11. Elaborar la Estrategia General de TIC y someterla a la consideración del Consejo, para su aprobación.
12. Realizar aquellas tareas de investigación que permitan la detección de mejores prácticas a nivel nacional e internacional, que pueden llegar a ser adoptadas por el Consejo y por las dependencias y entidades, en aquellas funciones y atribuciones que esta Ley les encomienda, para la óptima planeación, presupuestación, instrumentación, ejecución y consolidación de las políticas, programas, estrategias, acciones y soluciones en materia de gobierno digital.
13. Realizar talleres, conferencias, cursos, seminarios y demás actividades que permitan la difusión, conocimiento y capacitación del personal técnico y operativo de las dependencias y entidades, en lo que respecta al uso de las TIC; para su correcta implementación dentro de los trámites, servicios, procesos y procedimientos administrativos o jurisdiccionales, comunicaciones y en cualquier acto que se encuentre bajo la competencia de dichas instituciones públicas.
14. Auxiliar al Consejo en la vigilancia del cumplimiento de las políticas, programas, estrategias, acciones y soluciones adoptados en materia de gobierno digital, informando a dicho órgano sobre la realización de esta función.
15. Establecer canales de comunicación y vinculación interinstitucional entre el Consejo y las dependencias y entidades para una efectiva implementación y cumplimiento de las bases, principios y reglas establecidas en esta Ley, su Reglamento y en las disposiciones, lineamientos y demás instrumentos complementarios emitidos por el Consejo.
16. Auxiliar a las dependencias y entidades, en la integración del catálogo de regulaciones, trámites y servicios dentro de la ventanilla virtual, así como en la elaboración de sus proyectos internos.
17. Colaborar con la Secretaría de Seguridad Pública del Estado en la elaboración del Programa de Seguridad Informática y someterlo al Consejo, para su aprobación.
18. Elaborar las actas de las sesiones ordinarias y extraordinarias del Consejo y presentarlas ante sus integrantes para su respectiva firma.
19. Certificar actas, acuerdos y demás documentos emanados de las decisiones tomadas por el Consejo, dentro del ámbito de su competencia.
20. Las demás que le encomiende el Consejo, esta Ley, su Reglamento y demás disposiciones, lineamientos e instrumentos emitidos por el Consejo.

**SECCIÓN QUINTA**

**DE LAS FACULTADES DE LA COORDINACIÓN**

**Artículo 17.** La Coordinación, en adición a las funciones que le correspondan como Secretaría Técnica, funcionará como órgano auxiliar en la implementación de la política de gobierno digital y tendrá a su cargo las siguientes funciones:

1. Administrar la ventanilla virtual.
2. Colaborar con la autoridad correspondiente en materia de mejora regulatoria en la realización de las tareas técnico-operativas para la integración del catálogo estatal de regulaciones, trámites y servicios, dentro de la ventanilla virtual.
3. Poner a disposición de las dependencias y entidades, la infraestructura que permitirá el almacenamiento y hospedaje de los portales informativos, portales transaccionales, aplicaciones móviles y demás instrumentos tecnológicos que construyan dichas instituciones.
4. Poner a disposición de las y los particulares, los datos abiertos que se generen por el uso de los portales informativos, portales transaccionales, aplicaciones móviles y demás instrumentos tecnológicos construidos por las dependencias y entidades.
5. Las demás que le encomiende esta Ley, su Reglamento y demás disposiciones, lineamientos e instrumentos complementarios emitidos por el Consejo.

**CAPÍTULO SEGUNDO**

**DE LA PARTICIPACIÓN MUNICIPAL**

**Artículo 18.** Con la aprobación de los respectivos cabildos, las personas titulares de las Presidencias Municipales designarán, de acuerdo a sus capacidades técnicas, operativas, materiales y presupuestales, a la unidad administrativa o persona responsable que se encargará de la promoción, diseño, aprobación, vigilancia y evaluación de las políticas, planes, programas, estrategias, acciones y soluciones en materia de gobierno digital dentro del ámbito municipal y deberán ceñirse, en lo conducente, a las bases establecidas en esta Ley y su Reglamento.

**Artículo 19**. La persona responsable a que se refiere el artículo anterior, preferentemente deberá ser servidora o servidor público con nivel jerárquico de dirección o superior.

**Artículo 20.** La organización y funcionamiento de la unidad responsable de implementar las políticas públicas que deriven de esta Ley, se regirá conforme lo establezcan los reglamentos y demás disposiciones que emita el propio Ayuntamiento.

**TÍTULO CUARTO**

**DEL GOBIERNO DIGITAL**

**CAPÍTULO PRIMERO**

**DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES, Y EL GOBIERNO DIGITAL**

**Artículo 21.** Dentro de su respectivo ámbito de competencia, las dependencias y entidades deberán implementar políticas orientadas al acceso, por medio de TIC, de las y los particulares a los trámites, servicios, procesos y procedimientos administrativos o jurisdiccionales, comunicaciones, así como a cualquier otro acto que recaiga dentro de sus facultades o atribuciones.

Para ello, deben realizar las acciones correspondientes a la planeación, instrumentación, implementación, ejecución y consolidación de los programas, estrategias, acciones y demás actos que tengan como finalidad la puesta en marcha del gobierno digital dentro de los trámites, servicios, procesos y procedimientos administrativos y jurisdiccionales, comunicaciones y cualquier otro acto expedido por dichos órganos.

**Artículo 22.** En cuanto a la materia de gobierno digital se refiere, los órganos del Estado cuentan con las siguientes atribuciones:

1. Respetar, proteger e implementar las políticas públicas orientadas al acceso, dentro de su respectivo ámbito de competencia, al derecho que tienen las y los particulares para interactuar con las dependencias y entidades haciendo uso de las TIC dentro de aquellos trámites, servicios, procesos y procedimientos administrativos o jurisdiccionales, comunicaciones y cualquier otro acto que se encuentra dentro de sus funciones previstas en la normatividad aplicable, debiendo observar los principios y bases establecidas en esta Ley, su Reglamento y en demás disposiciones, lineamientos e instrumentos que emita el Consejo respectivo.
2. Observar, en el ámbito de sus competencias,las disposiciones, lineamientos y demás instrumentos que emita el Consejo respectivo.
3. Atender las recomendaciones emitidas por el Consejo respectivo.
4. Observar los esquemas de coordinación, colaboración, concertación y asociación instituidos por el Consejo respectivo, que tengan como finalidad la implementación de las políticas, planes, programas, estrategias, acciones y soluciones referentes al uso de las TIC dentro de los trámites, servicios, procesos y procedimientos administrativos o jurisdiccionales, comunicaciones o en cualquier otro acto que se encuentre dentro de su competencia.
5. Observar los lineamientos jurídicos y técnicos emitidos por el Consejo respectivo, en la construcción, implementación y puesta en marcha de los portales informativos, portales transaccionales, aplicaciones móviles, así como de cualquier otro instrumento tecnológico.
6. Construir portales informativos, portales transaccionales, aplicaciones móviles y demás instrumentos tecnológicos que permitan la correcta implementación de la política en materia de gobierno digital, basándose en los lineamientos mencionados en la fracción anterior.
7. Vigilar, en el ámbito de su competencia, que las y los servidores públicos observen los principios y bases establecidos en esta Ley, su Reglamento y en demás disposiciones, lineamientos e instrumentos que emita el Consejo respectivo.
8. Adoptar e implementar acciones consideradas como mejores prácticas nacionales e internacionales en materia de gobierno digital, con la finalidad de cubrir de una manera adecuada las necesidades de la sociedad, en cuanto a este rubro se refiere.
9. Observar, dentro de su respectivo ámbito de competencia, el Programa de Seguridad Informática.
10. Difundir y promover, dentro de su respectivo ámbito de competencia, el uso de las TIC por parte de las y los particulares para la interacción de estos con las dependencias y entidades.
11. Poner a disposición de las y los particulares en portales transaccionales, aquellos trámites, servicios, procesos y procedimientos administrativos o jurisdiccionales, comunicaciones y demás actos que se encuentren dentro de su competencia; siempre que estos sean susceptibles de digitalización, de conformidad con la normatividad aplicable.
12. Coordinarse con la autoridad correspondiente a fin de integrar, dentro de la ventanilla virtual, aquellos trámites, servicios, procesos y procedimientos administrativos o jurisdiccionales, comunicaciones y demás actos que se encuentren dentro de su competencia.
13. Observar los principios, bases, ejes y planes de acción establecidos en el Programa.
14. Observar las disposiciones y demás elementos regulatorios establecidos en la Estrategia General de TIC.
15. Ser parte de los talleres, conferencias, cursos, seminarios y demás actividades realizadas por el Consejo respectivo, con la finalidad de que el personal técnico y operativo de la institución pueda realizar sus funciones, conforme a los principios y bases establecidos en esta Ley, su Reglamento y en demás disposiciones, lineamientos e instrumentos que emita el Consejo respectivo.
16. Implementar mecanismos que permitan establecer canales de comunicación con el Consejo respectivo, para un efectivo cumplimiento de las bases, principios y reglas establecidas en esta Ley, su Reglamento y en las disposiciones, lineamientos y demás instrumentos emitidos por este.
17. Elaborar su proyecto interno y presentarlo ante el Consejo respectivo.
18. Ejecutar la política de datos abiertos y de tratamiento de datos personales que se deberá implementar en los portales informativos, portales transaccionales, aplicaciones móviles y demás instrumentos tecnológicos que las dependencias y entidades pongan a disposición de las y los particulares.
19. Establecer un área o unidad administrativa en materia de informática, que se encargue de la implementación del gobierno digital dentro de la institución.
20. Integrar un repositorio de documentos digitales en el que se custodien por un plazo de diez años, aquellos mensajes de datos, documentos digitales o digitalizados y demás información otorgada por las y los particulares, así como aquellos generados por la gestión, sustanciación y resolución de los trámites, servicios, procesos y procedimientos administrativos y jurisdiccionales, comunicaciones y cualquier otro acto que se encuentre dentro de su competencia; debiendo seguir los lineamientos referentes a la materia de protección de datos personales, establecidos en la normatividad aplicable a este rubro.
21. Acudir a las sesiones del Consejo respectivo cuando las y los titulares de las dependencias o las personas que estos designen, sean integrantes de dicho órgano colegiado o cuando alguna persona representante de las dependencias o entidades participe como invitada.
22. Elaborar manuales de procedimientos, así como cualquier otro documento en el que se establezca la forma en la que se hará uso de las TIC dentro de los trámites, servicios, procesos y procedimientos administrativos o jurisdiccionales, comunicaciones y en cualquier otro acto que se encuentre dentro de su competencia y que esté disponible para el público en general.
23. Crear indicadores que permitan realizar la medición de aquellos aspectos que se encuentren relacionados con el uso de las TIC dentro de los trámites, servicios, procesos y procedimientos administrativos o jurisdiccionales, comunicaciones y en cualquier otro acto que se encuentre dentro de su competencia, debiendo publicar dicha información en sus portales informativos.
24. Implementar el uso de la firma electrónica avanzada dentro de los trámites, servicios, procesos y procedimientos administrativos o jurisdiccionales, comunicaciones o en aquellos actos en los que se necesite la manifestación de la voluntad de su solicitante y que se encuentren disponibles en portales transaccionales y aplicaciones móviles.
25. Las demás que les confiera esta Ley, su Reglamento y demás disposiciones, lineamientos e instrumentos emitidos por el Consejo respectivo.

**CAPÍTULO SEGUNDO**

**DE LAS BASES DEL GOBIERNO DIGITAL**

**Artículo 23.** La planeación, presupuestación, instrumentación, ejecución y consolidación de las políticas, programas, estrategias, acciones y soluciones en materia de gobierno digital dentro del Estado estará soportada en las bases que se establecen en esta Ley.

**Artículo 24.** Las bases del gobierno digital dentro del Estado son:

1. El Programa.
2. La Estrategia General de TIC.
3. El Programa de Seguridad Informática.
4. Los proyectos internos en materia de TIC de las dependencias y entidades.
5. Los convenios de portabilidad.

**SECCIÓN PRIMERA**

**DEL PROGRAMA**

**Artículo 25.** El Programa es el documento sobre el que se establecerán los principios fundamentales en cuanto al uso de las TIC dentro de la gestión pública en el Estado.

Tiene por objeto establecer los ejes, estrategias y planes de acción a seguir por las dependencias y entidades con la finalidad de contar con una serie de políticas, programas, estrategias, acciones y soluciones que permitan la correcta implementación de las TIC dentro de los trámites, servicios, procesos y procedimientos administrativos o jurisdiccionales, comunicaciones y en cualquier otro acto que se encuentre bajo la competencia de dichas instituciones.

Deberá estar basado en los principios, bases, disposiciones y ordenamientos establecidos en la Ley de Planeación del Estado de Chihuahua, en esta Ley, su Reglamento, así como en demás disposiciones legales y reglamentarias, referentes a las materias de planeación del desarrollo y gobierno digital.

**Artículo 26.** El Consejo, en su calidad de órgano rector en la materia de gobierno digital, es la institución facultada para aprobar el Programa.

**Artículo 27.** El Programa deberá contener, como mínimo, los siguientes rubros:

1. El diagnóstico de la situación actual sobre el uso de las TIC dentro de los trámites, servicios, procesos y procedimientos administrativos o jurisdiccionales, comunicaciones y en cualquier otro acto que se encuentre bajo la competencia de las dependencias y entidades.
2. Los ejes sobre los que se dirigirá la política pública en materia de gobierno digital, debiendo observar los principios y bases establecidos en el Plan Estatal de Desarrollo.
3. Las estrategias y acciones que permitan la correcta implementación del gobierno digital, dentro de las dependencias y entidades.
4. Los esquemas de participación que deberán llevar a cabo las dependencias y entidades en la ejecución de la política de gobierno digital, así como en las estrategias que deberán seguirse para una correcta coordinación entre dichas instituciones y el Consejo.
5. Las garantías mínimas que deberán implementar las dependencias y entidades, por medio de las cuales se proteja el derecho que tienen las y los particulares para interactuar con dichas instituciones, a través del uso de las TIC.
6. Los mecanismos de participación de los que el sector privado y social puede ser parte, con la finalidad de implementar de manera adecuada la política de gobierno digital dentro de las dependencias y entidades.
7. Los principios en materia presupuestal que deberán seguir las dependencias y entidades, así como el Consejo, dentro de las acciones correspondientes a la planeación, presupuestación, instrumentación, ejecución y consolidación de las políticas, programas, estrategias, acciones y soluciones en materia de gobierno digital.
8. Los demás rubros que el Consejo estime pertinentes.

**SECCIÓN SEGUNDA**

**DE LA ESTRATEGIA GENERAL DE TIC**

**Artículo 28.** La Estrategia General de TIC es el documento donde se contendrán las políticas, estrategias, acciones y soluciones que deberán implementar las dependencias y entidades, con la finalidad de que se pueda contar con una metodología, para la implementación del uso de las TIC dentro de los trámites, servicios, procesos y procedimientos administrativos o jurisdiccionales, comunicaciones y en cualquier otro acto que se encuentre bajo la competencia de dichas instituciones.

**Artículo 29.** La Estrategia General de TIC deberá ser elaborada por la Secretaría Técnica y presentada al Consejo para su aprobación.

**Artículo 30.** En la elaboración de la Estrategia General de TIC, la Secretaría Técnica deberá observar los principios y bases establecidos en esta Ley, su Reglamento y demás disposiciones, lineamientos e instrumentos emitidos por el Consejo; así como los ejes, estrategias y planes de acción establecidos en el Programa.

**Artículo 31.** La Estrategia General de TIC deberá contener, como mínimo, los siguientes rubros:

1. Una descripción de los ejes, estrategias y planes de acción establecidos en el Programa vigente y, en caso de considerarlo necesario, aquellas acciones que han llevado a su concreción y los resultados que estos han arrojado.
2. Los esquemas de participación y coordinación establecidos en el Programa, conforme a la fracción IV del artículo 27 de esta Ley, y las acciones y criterios a seguir por parte de las dependencias y entidades para una correcta implementación de las TIC, dentro de los trámites, servicios, procesos y procedimiento administrativos o jurisdiccionales, comunicaciones y demás actos que se encuentren en el ámbito de su competencia.
3. Las bases generales sobre las que se soportará la elaboración y operación del Programa de Seguridad Informática.
4. El análisis de los proyectos internos emitidos por las dependencias y entidades y las recomendaciones sobre las acciones a implementar para una adecuada operación de la política de gobierno digital dentro de dichas instituciones.
5. La descripción o especificación de los datos abiertos que se pondrán a disposición de las y los particulares, derivado del uso de los portales informativos, portales transaccionales, aplicaciones móviles y demás instrumentos tecnológicos puestos en operación por parte de las dependencias y entidades. En todo caso deberán observarse las disposiciones establecidas en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Chihuahua, en la Ley de Protección de Datos Personales del Estado de Chihuahua, en esta Ley y demás instrumentos aplicables.
6. Los estándares que deberán seguir las dependencias y entidades en la construcción, implementación y operación de los portales informativos, portales transaccionales, aplicaciones móviles y demás instrumentos tecnológicos, así como en cualquier otro rubro referente a la materia de gobierno digital.
7. La arquitectura de gobierno digital que deberán observar las dependencias y entidades en la construcción de los portales informativos, portales transaccionales, aplicaciones móviles y demás instrumentos tecnológicos, puestos en operación por parte dichas instituciones.
8. El protocolo de interoperabilidad entre los portales informativos, portales transaccionales, aplicaciones móviles y demás instrumentos tecnológicos habilitados por las dependencias y entidades.
9. El protocolo de integración de los portales informativos y portales transaccionales de las dependencias y entidades dentro de la ventanilla virtual.
10. Las reglas de la operación y uso de la firma electrónica avanzada dentro de los portales transaccionales y aplicaciones móviles de las dependencias y entidades, de acuerdo con lo establecido en esta Ley.
11. Las acciones que deberán seguir las dependencias y entidades para la implementación de la firma electrónica avanzada dentro de los trámites, servicios, procesos y procedimientos administrativos o jurisdiccionales, comunicaciones y en cualquier otro acto que se encuentre en el ámbito de competencia de las dependencias y entidades y en los que sea necesaria la manifestación de la voluntad de las personas solicitantes, gestoras y de quienes resuelven.
12. El diagnóstico sobre las necesidades de creación de software libre y código abierto detectadas por el Instituto, de conformidad con el artículo 164 de esta Ley.
13. Los indicadores de desempeño que se medirán con la implementación y operación de la política de gobierno digital, para que los resultados arrojados sean puestos a disposición de las y los particulares por medio de los portales informativos que para tal efecto disponga el Consejo.
14. Las mejores prácticas detectadas a nivel nacional e internacional, que podrán adoptar las dependencias y entidades para una correcta implementación y operación de la política de gobierno digital dentro de las mismas.
15. Los proyectos de atención prioritaria en materia de gobierno digital que deberán ponerse en operación durante la vigencia de la Estrategia General de TIC.
16. Los demás rubros que el Consejo considere necesarios.

**SECCIÓN TERCERA**

**DEL PROGRAMA DE SEGURIDAD INFORMÁTICA**

**Artículo 32.** El Programa de Seguridad Informática es el documento técnico que tiene por objeto establecer las estrategias y acciones referentes a la implementación de mecanismos de seguridad informática y de protección de datos personales, que deberán ser observados por las dependencias y entidades, en la construcción de sus portales informativos, portales transaccionales, aplicaciones móviles y en demás instrumentos tecnológicos que se adopten en el marco de la política de gobierno digital.

**Artículo 33.** El Programa de Seguridad Informática tendrá la duración y contenido que se establezca en el Reglamento; deberá ser elaborado por la Secretaría Técnica, en colaboración con la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, y será sometido a la aprobación del Consejo en la segunda sesión ordinaria del último año de vigencia del documento.

**SECCIÓN CUARTA**

**DE LOS PROYECTOS INTERNOS**

**Artículo 34.** Los proyectos internos son los documentos programáticos emitidos por las dependencias y entidades, en los que se establecerán los avances, hallazgos y prácticas implementadas por dichas instituciones; conteniendo, además, los indicadores de medición de dichos rubros, así como los proyectos que dicha institución desea realizar durante el periodo de vigencia del documento.

**Artículo 35.** La persona titular de la dependencia o entidad correspondiente será responsable de la emisión del proyecto interno respectivo.

**Artículo 36.** Los proyectos internos tendrán la vigencia y contenido que se establezca en el Reglamento de esta Ley.

**SECCIÓN QUINTA**

**DE LOS CONVENIOS DE PORTABILIDAD**

**Artículo 37.** Los convenios de portabilidad son los instrumentos jurídicos por medio de los cuales los órganos del Estado reconocen la validez de los certificados de firma electrónica avanzada expedidos por los demás órganos del Estado, instituciones del ámbito federal, de otras entidades federativas, de los municipios del Estado, de municipios o de alcaldías de otras entidades federativas, así como de organismos del sector público, privado y social; siempre que dichos certificados de firma electrónica avanzada cuenten con las especificaciones, características y condiciones que permitan corroborar su autenticidad y disponibilidad, guardando en todo momento la confidencialidad, privacidad e integridad de los datos personales de sus titulares, pudiendo también a través de ellos corroborar su identidad; conforme a las prácticas de certificación previstas en las normas federales, Normas Oficiales Mexicanas y estándares en la materia, así como en las establecidas en esta Ley y su Reglamento.

**Artículo 38.** Las personas titulares de los órganos del Estado quedan facultadas para suscribir los convenios de portabilidad que estimen pertinentes.

La persona titular de la Presidencia del Consejo, o quien esta designe, será la facultada para suscribir los convenios de portabilidad que celebre el Poder Ejecutivo.

**Artículo 39.** La Secretaría Técnica es la autorizada para coordinar los trabajos relacionados con el reconocimiento de los certificados de firma electrónica avanzada en los portales transaccionales, aplicaciones móviles y demás instrumentos tecnológicos habilitados por las dependencias y entidades en los términos del párrafo siguiente y en los que se pueda hacer uso de dicha herramienta.

En caso de que una de las dependencias y entidades desee hacer uso de los certificados de firma electrónica avanzada reconocidos mediante el convenio de portabilidad correspondiente, deberá acudir ante la Secretaría Técnica, a fin de que pueda establecer las directrices a seguir, para la adopción de dichos certificados dentro de los portales transaccionales, aplicaciones móviles y demás instrumentos tecnológicos habilitados, de acuerdo con lo que establezca el Reglamento de esta Ley.

**Artículo 40.** Para el reconocimiento de los certificados de firma electrónica avanzada expedidos por las autoridades certificadoras establecidas en las fracciones I a III del artículo 93 de esta Ley, no se necesitará la suscripción de un convenio de portabilidad.

**Artículo 41.** El Consejo, mediante disposiciones, lineamientos o cualquier otro instrumento que emita, deberá establecer los requerimientos mínimos con los que deberán contar los certificados de firma electrónica avanzada susceptibles de ser reconocidos por las dependencias y entidades, por medio de un convenio de portabilidad.

**TÍTULO QUINTO**

**DE LOS INSTRUMENTOS TECNOLÓGICOS DEL GOBIERNO DIGITAL**

**CAPÍTULO PRIMERO**

**DE LA FIRMA ELECTRÓNICA AVANZADA**

**SECCIÓN PRIMERA**

**DEL USO DE LA FIRMA ELECTRÓNICA AVANZADA**

**Artículo 42.** La firma electrónica avanzada es considerada identificación oficial electrónica y puede ser empleada en los trámites, servicios, procesos y procedimientos administrativos o jurisdiccionales, comunicaciones y en cualquier otro acto que se encuentre bajo la competencia de los órganos del Estado y que se desahogue por medio del uso de portales transaccionales, aplicaciones móviles o en la ventanilla virtual; así como en otros instrumentos tecnológicos que habiliten las instituciones del ámbito estatal y municipal.

**Artículo 43.** En todo acto jurídico que se celebre entre particulares, y entre estos y los órganos del Estado, se podrá hacer uso de la firma electrónica avanzada, siempre que la normatividad aplicable no establezca alguna restricción, formalidad o solemnidad que impida la utilización de dicha herramienta, de mensajes de datos o de documentos digitales.

**Artículo 44.** La firma electrónica avanzada producirá los mismos efectos jurídicos que la firma autógrafa.

Salvo prueba en contrario, los documentos que contengan firma electrónica avanzada producirán los mismos efectos jurídicos y probatorios que aquellos instrumentos que cuenten con firma autógrafa.

**Artículo 45.** Los certificados de firma electrónica avanzada son intransferibles.

Salvo prueba en contrario, cualquier uso de los certificados de firma electrónica avanzada se le adjudicará a su titular, pudiendo ser responsable de cualquier manejo inadecuado o mal uso de esta herramienta.

**Artículo 46.** Las personas físicas y morales, así como las y los servidores públicos de los órganos del Estado, podrán ser titulares de un certificado de firma electrónica avanzada, debiendo observar los requisitos y procedimientos establecidos en esta Ley, su Reglamento y demás disposiciones aplicables, para la obtención de dicha herramienta.

Las y los servidores públicos deberán contar con un certificado de firma electrónica avanzada que utilizarán en los actos que deban intervenir en razón del empleo, cargo o comisión y funciones que desempeñen, el que será distinto al que puedan obtener para interactuar frente a los órganos del Estado.

**Artículo 47.** Las personas titulares de los certificados de firma electrónica avanzada deberán realizar aquellas acciones que resulten necesarias para la conservación de dicha herramienta, debiendo evitar su robo o substracción por parte de una tercera persona.

Para el caso de los órganos del Estado, las y los titulares de dichas instituciones y las personas que designen serán responsables de la custodia del certificado de firma electrónica avanzada respectivo, debiendo observar lo establecido en el párrafo anterior y en el artículo 45 de esta Ley.

**Artículo 48.** En las comunicaciones entre los órganos del Estado, entre estos y otras instituciones del ámbito internacional, federal, de otras entidades federativas, con municipios o alcaldías de otras entidades federativas y con aquellas del sector privado, social o académico se podrá hacer uso de mensajes de datos y de documentos digitales que contengan firma electrónica avanzada.

Para el envío de las comunicaciones mencionadas en el párrafo anterior, se podrá hacer uso de TIC, así como de medios físicos, siempre que en ellos se encuentre estampada o impresa la cadena de firma electrónica avanzada generada por el signado del mensaje de datos o del documento respectivo.

**Artículo 49.** En el uso de la firma electrónica avanzada, los órganos del Estado deberán realizar las siguientes acciones:

1. Verificar la autenticidad del certificado de la firma electrónica avanzada.
2. Verificar la vigencia del certificado de firma electrónica avanzada.
3. Verificar, en su caso, la fecha electrónica en los escritos, promociones, gestiones y demás mensajes de datos y documentos digitales presentados por las y los particulares, que se relacionen con la solicitud, gestión y sustanciación de los trámites, servicios, procesos y procedimientos administrativos o jurisdiccionales, comunicaciones y demás actos que se encuentren bajo su competencia.

**SECCIÓN SEGUNDA**

**DE LOS PRINCIPIOS RECTORES DE LA FIRMA ELECTRÓNICA AVANZADA**

**Artículo 50.** El uso de la firma electrónica avanzada tiene los siguientes principios rectores:

1. **Neutralidad tecnológica**. Consiste en que la tecnología utilizada para la emisión de certificados digitales y para la prestación de los servicios relacionados con la firma electrónica avanzada será aplicada de modo tal que no excluya, restrinja o favorezca alguna tecnología en particular.
2. **Autenticidad**.- Consiste en que la firma electrónica avanzada en un mensaje de datos o, en su caso, en un documento digital, permite dar certeza de que el mismo ha sido emitido por la o el firmante, de manera tal que su contenido le es atribuible al igual que las consecuencias jurídicas que de él deriven.
3. **Conservación**. Un mensaje de datos o documento digital puede existir permanentemente y es susceptible de reproducción.
4. **Confidencialidad**. Consiste en que la firma electrónica avanzada en un mensaje de datos o, en su caso, en un documento digital, garantiza que solo pueda ser cifrado por la o el firmante y el receptor.
5. **Equivalencia funcional**. Consiste en que la firma electrónica avanzada en un mensaje de datos o, en su caso, en un documento digital, satisface el requisito de firma del mismo modo que la firma autógrafa en los documentos impresos.
6. **Integridad.** Consiste en que la firma electrónica avanzada en un mensaje de datos o, en su caso, en un documento digital, permite dar certeza de que este ha permanecido completo e inalterado desde su firma, con independencia de los cambios que hubiere podido sufrir el medio que lo contiene como resultado del proceso de comunicación, archivo o presentación.
7. **No repudio**. Consiste en que la firma electrónica avanzada contenida en mensajes de datos o documentos digitales garantiza la autoría e integridad de estos y que dicha firma corresponde exclusivamente a la o el firmante.

**SECCIÓN TERCERA**

**DE LOS EXPEDIENTES DIGITALES, MENSAJES DE DATOS**

**Y DOCUMENTOS DIGITALES**

**Artículo 51.** Los expedientes digitales, los mensajes de datos y los documentos digitales tendrán el mismo valor jurídico y la misma eficacia probatoria que la Ley otorga a los documentos en soporte físico y con firma autógrafa, salvo en aquellos casos que esta Ley y demás normatividad aplicable establezca que los documentos deban ser presentados de forma física o mediante comparecencia de la o el firmante que tenga interés.

**Artículo 52.** La reproducción en formato impreso de los mensajes de datos y de los documentos digitales tendrá valor probatorio pleno cuando la información contenida en ellos se ha conservado en su integridad, a partir de que se generó en su forma definitiva y no sea impugnada la autenticidad o exactitud del mensaje de datos, del documento digital, de la cadena de firma electrónica avanzada o de los datos que permitan conocer la información referente al uso de la firma electrónica avanzada.

**Artículo 53.** Para que surta efectos un mensaje de datos o un documento digital, se requerirá el cumplimiento de cualquiera de los siguientes supuestos:

1. Que el sistema de información, de correo electrónico, el instrumento tecnológico, el portal transaccional o la aplicación móvil habilitada por el destinatario genere y emita un acuse de recibo electrónico en el que conste la entrega del mensaje de datos o documento digital.
2. Que dentro de un plazo que no podrá ser mayor dos días hábiles posteriores a la emisión del mensaje de datos o documento digital, no exista evidencia de la no recepción del mensaje de datos o documento digital.

**Artículo 54.** En lo referente al acuse de recibo de mensajes de datos o documentos digitales, si al enviar o antes de enviarlo, el emisor solicita o acuerda con el destinatario que se acuse recibo del mensaje de datos o del documento digital, pero no se ha acordado entre estos una forma o método determinado para efectuarlo, se podrá acusar recibo mediante todo acto del destinatario que baste para indicar al emisor que se ha recibido el mensaje de datos.

**Artículo 55.** El contenido de los expedientes digitales, mensajes de datos y de los documentos digitales que contengan firma electrónica avanzada, concernientes a la solicitud, gestión, sustanciación y resolución de los trámites, servicios, procesos y procedimientos administrativos o jurisdiccionales, comunicaciones y demás actos que se encuentren bajo la competencia de los órganos del Estado, deberán conservarse por estos en soporte digital por un período mínimo de diez años, empleando dispositivos o TIC que permitan el almacenamiento de documentos y archivos de manera digital.

Para el caso de que se necesite que los mensajes de datos y documentos digitales consten de forma física a manera de expediente, estos podrán ser impresos y resguardados en dicho soporte, evitando cualquier alteración a su contenido o a la cadena de firma electrónica avanzada que se encuentra en ellos.

Los expedientes digitales, mensajes de datos y documentos digitales impresos podrán constar en expedientes físicos, siempre que así lo soliciten las partes involucradas dentro de los procesos mencionados en el primer párrafo de este artículo.

**Artículo 56.** Las y los particulares podrán hacer uso de los expedientes digitales, mensajes de datos o de documentos digitales para la realización de cualquier acto jurídico, siempre que las leyes de la materia aplicable no prevean lo contrario.

**Artículo 57.** En aquellos actos suscritos por particulares y que consten en expedientes digitales, mensajes de datos o documentos digitales en los que se encuentre estampada la cadena de firma electrónica avanzada, estos deberán ser conservados en dispositivos o TIC que permitan su almacenamiento, contando con los mismos efectos jurídicos que un documento físico con firma autógrafa.

**Artículo 58.** Los mensajes de datos y documentos digitales se tendrán por expedidos en el lugar donde el emisor tenga su domicilio legal o convencional y por recibido en el domicilio electrónico del destinatario, salvo prueba o acuerdo en contrario.

**Artículo 59.** Se presumirá que un mensaje de datos o un documento digital proviene del emisor si ha sido enviado:

1. Usando medios de identificación, tales como claves, contraseñas o la firma electrónica avanzada del emisor o por alguna persona facultada para actuar en nombre de él respecto del mensaje de datos o documento digital; o
2. Por un sistema de información, de correo electrónico, instrumento tecnológico, portal transaccional o aplicación móvil habilitada por el emisor o en su nombre para que opere automáticamente.

**Artículo 60.** Los expedientes digitales, mensajes de datos y documentos digitales tendrán valor probatorio pleno, conforme a las reglas establecidas en esta Ley, salvo lo que dispongan al respecto otras leyes en la materia que estas regulan, cuando se acredite lo siguiente:

1. Que contengan la cadena de firma electrónica avanzada.
2. La fiabilidad del método en que hayan sido generados, archivados y conservados.
3. Que se ha conservado la integridad de la información a partir del momento en que estos se generaron en su forma definitiva.

**Artículo 61.** Se presumirá, salvo prueba en contrario, que un mensaje de datos o un documento digital proviene de una persona determinada, cuando este contenga la cadena de firma electrónica avanzada generada por el uso del certificado de quien es titular.

**Artículo 62.** El momento de recepción de un mensaje de datos o documento digital se determinará de la forma siguiente:

1. Si se pactó la emisión de un acuse de recibo electrónico, al emitirse este y que haya sido generado por el sistema de información, de correo electrónico, instrumento tecnológico, portal transaccional o aplicación móvil habilitada por el destinatario; o
2. Al encontrarse disponible para el destinatario dentro del sistema de información, de correo electrónico, instrumento tecnológico, portal transaccional o aplicación móvil habilitada por este; sin mediar acuse de recibo electrónico.

**Artículo 63.** Cuando las leyes requieran que un expediente digital, mensaje de datos o un documento digital sea presentado y conservado en su forma original, se tendrá por satisfecho este requisito, si estos se encuentran almacenados en dispositivos o TIC que permitan garantizar de manera confiable que se ha conservado la integridad de la información contenida en ellos, a partir del momento en que se generó en su forma definitiva.

**Artículo 64.** Los órganos del Estado deberán poner a disposición de las personas que acrediten contar con un interés legítimo, aquellos medios que permitan la consulta de los expedientes digitales, mensajes de datos y de los documentos digitales que se encuentren bajo su custodia.

Asimismo, los órganos del Estado se encuentran facultados para conformar expedientes físicos, a través de la impresión de los expedientes digitales, mensajes de datos o documentos digitales que se encuentran bajo su custodia, siempre que dicha acción no altere ni modifique:

1. La información que se contiene en ellos.
2. La cadena de firma electrónica avanzada estampada en los mensajes de datos o documentos digitales.
3. Aquellos datos que permitan conocer la información referente al uso de la firma electrónica avanzada.

**Artículo 65.** De impugnarse la autenticidad o exactitud de un expediente digital, mensaje de datos o documento digital, se procederá a su comprobación ante la autoridad certificadora o la prestadora de servicios de certificación correspondiente, para lo cual se verificará:

1. Que el mensaje de datos o documento digital contenga la firma electrónica avanzada.
2. La fiabilidad del método en que hayan sido generados, archivados o conservados.
3. Que se ha conservado la integridad de la información a partir del momento en que se generaron por primera vez en su forma definitiva como tales o en alguna otra forma.
4. La garantía de confidencialidad, autenticidad, conservación e integridad de la información generada que ofrezca el sistema de información, de correo electrónico, instrumento tecnológico, portal transaccional o aplicación móvil, correspondiente.

**SECCIÓN CUARTA**

**DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LAS Y LOS PARTICULARES RESPECTO DE LA FIRMA ELECTRÓNICA AVANZADA**

**Artículo 66.** Aunado a los derechos reconocidos en esta Ley, las y los particulares titulares de un certificado de firma electrónica avanzada tendrán las siguientes prerrogativas:

1. Recibir su certificado de firma electrónica avanzada y, cuando así lo solicite, la constancia de existencia y registro.
2. Revocar y, en su caso, solicitar un nuevo certificado de firma electrónica avanzada, cuando así convenga a sus intereses.
3. Recibir información sobre el funcionamiento y características de la firma electrónica avanzada, las condiciones precisas para la utilización del certificado de firma electrónica avanzada y sus límites de uso, los costos del servicio y los términos por los cuales se obligan la autoridad certificadora o la prestadora de servicios de certificación correspondiente y la o el firmante.
4. Conocer el domicilio convencional y electrónico, así como el sitio web de la autoridad certificadora o de la prestadora de servicios de certificación, así como de la coordinación para solicitar aclaraciones, presentar quejas o reportes.
5. Los demás que convengan con la autoridad certificadora o con la prestadora de servicios de certificación correspondiente.

**Artículo 67.** La persona titular del certificado de firma electrónica avanzada tiene las siguientes obligaciones:

1. Proporcionar datos veraces, completos, oportunos y exactos.
2. Mantener el control exclusivo de los datos de creación de su firma electrónica avanzada.
3. Solicitar la revocación del certificado de firma electrónica avanzada a la autoridad certificadora o a la prestadora de servicios de certificación correspondiente, inmediatamente después de que conozca de alguna circunstancia que hubiera comprometido la confidencialidad y seguridad de su firma electrónica avanzada.
4. Informar, a la brevedad posible, sobre cualquier modificación a los datos personales que estén asociados al certificado de firma electrónica avanzada.
5. Cualquier otra que se acuerde al momento de la firma del certificado de firma electrónica avanzada o que se establezca dentro de las disposiciones jurídicas aplicables.

**SECCIÓN QUINTA**

**DE LAS CARACTERÍSTICAS DE LA FIRMA ELECTRÓNICA AVANZADA**

**Artículo 68.** Las disposiciones establecidas en esta Sección serán aplicables de modo que no excluyan, restrinjan o priven a cualquier método de creación de firmas electrónicas avanzadas, siempre y cuando cumplan con los requisitos que establece esta Ley.

**Artículo 69.** La firma electrónica avanzada se considerará como tal, si cumple al menos con los siguientes requisitos y características:

1. Que los archivos expedidos por las autoridades certificadoras o prestadoras de servicios de certificación indiquen que se expide con el carácter de componentes de la firma electrónica avanzada.
2. Que se cuente con un certificado de firma electrónica avanzada vigente.
3. Que contenga el código único de identificación o número de serie del certificado de firma electrónica avanzada.
4. Que identifique a la autoridad certificadora y, en su caso, a la prestadora de servicios de certificación que emite el certificado de firma electrónica avanzada correspondiente, incluyendo la firma electrónica avanzada de estas.
5. Que permita determinar la fecha electrónica del mensaje de datos o de los documentos digitales creados para su utilización.
6. Que los datos de creación de la firma electrónica avanzada, en el contexto en que son utilizados, corresponden exclusivamente a la o el firmante.
7. Que los datos de creación de la firma electrónica avanzada estén en el momento de la firma bajo el control exclusivo de la o el firmante.
8. Que sea posible detectar cualquier alteración de la firma electrónica avanzada, realizada posterior al momento del signado de un mensaje de datos o de un documento digital en el que se utilice dicha herramienta.
9. Que los datos utilizados para su generación se puedan producir solo una vez, de tal forma que se asegure razonablemente su confidencialidad.
10. La seguridad suficiente y razonable de que no puede ser alterada por cualquier TIC existente.
11. Que permita conservar la integridad del mensaje de datos o del documento digital donde fue empleada**.**

Los certificados de firma electrónica avanzada expedidos por autoridades no establecidas en esta Ley deberán cumplir con los requisitos mencionados en este artículo, para su reconocimiento y validez dentro del Estado.

Para el reconocimiento y validez de los certificados de firma electrónica avanzada mencionados en el párrafo anterior, se deberá suscribir un convenio de portabilidad en los términos de esta Ley.

**SECCIÓN SEXTA**

**DE LA OBTENCIÓN, RENOVACIÓN, SUSPENSIÓN, REVOCACIÓN Y EXTINCIÓN DE LOS CERTIFICADOS DE FIRMA ELECTRÓNICA AVANZADA**

**Artículo 70.** Para la obtención o renovación de un certificado de firma electrónica avanzada expedido por parte de las autoridades certificadoras o por las prestadoras de servicios de certificación, se deberá llevar a cabo el siguiente procedimiento:

1. Las y los particulares que deseen obtener un certificado de firma electrónica avanzada o su renovación deberán presentar su solicitud, de manera física o digital, ante la autoridad certificadora o prestadora de servicios de certificación correspondiente, así como los datos, documentos y demás información que establezca el Reglamento de esta Ley.
2. Tratándose de servidoras o servidores públicos adscritos a los órganos del Estado, las y los titulares de dichas instituciones o las personas que estos designen, deberán presentar de manera física o digital, las solicitudes para la expedición o renovación de certificados de firma electrónica avanzada ante la autoridad certificadora o prestadora de servicios de certificación correspondiente.
3. Recibida la solicitud, la autoridad certificadora o prestadora de servicios de certificación correspondiente, deberá verificar la identidad de la o el firmante con base en los documentos oficiales de identificación que esta le requiera, así como el cumplimiento de los demás requisitos que se establezcan en el Reglamento de esta Ley.
4. Una vez verificada la autenticidad de los documentos requeridos y que se cumpla con todos los requisitos necesarios, la autoridad certificadora o la prestadora de servicios de certificación correspondiente, expedirá el certificado de firma electrónica avanzada y registrará el certificado en su base de datos.
5. La o el solicitante, una vez que obtenga el certificado de firma electrónica avanzada, deberá resguardar los archivos que la componen, en un dispositivo o TIC que permita el resguardo y conservación de documentos digitales.

**Artículo 71.** El Reglamento de esta Ley deberá establecer los requisitos que deberán cumplir las personas solicitantes de un certificado de firma electrónica avanzada ante las autoridades certificadoras o ante las prestadoras de servicios de certificación.

**Artículo 72.** Los certificados de firma electrónica avanzada tendrán valor probatorio en los términos de esta Ley y surtirán efectos jurídicos cuando estén firmados electrónicamente por la autoridad certificadora o prestadora de servicios de certificación correspondiente.

**Artículo 73.** Los efectos del certificado de firma electrónica avanzada son:

1. Autenticar que la firma electrónica avanzada pertenece a determinada persona.
2. Identificar a la persona titular de la firma electrónica avanzada, en los portales transaccionales, aplicaciones móviles y demás instrumentos tecnológicos donde sea utilizada dicha herramienta.
3. Verificar la vigencia de la firma electrónica avanzada.

**Artículo 74.** Los certificados de firma electrónica avanzada emitidos por las autoridades certificadoras o por las prestadoras de servicios de certificación, deberán contener como mínimo los siguientes elementos:

1. La indicación de que el archivo emitido se expide en carácter de certificado de firma electrónica avanzada.
2. El código de identificación único o número de serie del certificado de firma electrónica avanzada.
3. La firma electrónica avanzada de la autoridad certificadora o prestadora de servicios de certificación, emisor del certificado de la firma electrónica avanzada.
4. El nombre, denominación o razón social de la autoridad certificadora o de la prestadora de servicios de certificación que emite el certificado de firma electrónica avanzada.
5. El domicilio electrónico de la autoridad certificadora o de la prestadora de servicios de certificación que emite el certificado de firma electrónica avanzada.
6. El sitio web de la autoridad certificadora o de la prestadora de servicios de certificación, en el que pueda consultarse la información insertada dentro del certificado de firma electrónica avanzada, de acuerdo con lo establecido en el artículo 85 de esta Ley.
7. El nombre, denominación o razón social de la persona titular del certificado de firma electrónica avanzada.
8. El domicilio electrónico de la persona titular del certificado de firma electrónica avanzada.
9. Para el caso de personas físicas, la CURP y RFC de la o el titular del certificado de firma electrónica avanzada.
10. Para el caso de personas morales y órganos del Estado, el RFC de la persona jurídica o de la institución correspondiente.
11. El periodo de vigencia del certificado de firma electrónica avanzada.
12. La fecha y hora de la emisión, suspensión, revocación o renovación del certificado de firma electrónica avanzada.
13. En su caso, los límites de uso del certificado de firma electrónica avanzada.
14. La referencia de la tecnología empleada para la creación del certificado de firma electrónica avanzada.

**Artículo 75.** La vigencia de los certificados de firma electrónica avanzada será de cuatro años como máximo, la cual iniciará a partir del momento de su emisión y expirará el día y hora que señala el certificado correspondiente.

Los certificados de firma electrónica avanzada tendrán valor probatorio pleno, salvo lo que disponga esta Ley y otras normas en la materia que ellas regulan, y surtirán efectos jurídicos cuando estén firmados electrónicamente por la autoridad certificadora o prestadora de servicios de certificación correspondiente.

**Artículo 76.** Las causas de suspensión del certificado de firma electrónica avanzada son las siguientes:

1. Por solicitud de la persona firmante, poderdante o representada.
2. Por resolución judicial o administrativa que lo ordene.
3. Porque se disuelvan, liquiden o extingan las sociedades, asociaciones y demás personas morales. En este caso, serán las personas liquidadoras quienes presenten la solicitud correspondiente.
4. Porque la sociedad escindente o la sociedad fusionada desaparezcan con motivo de la escisión o fusión, respectivamente. En el primer caso, la suspensión la podrá solicitar cualquiera de las sociedades escindidas; en el segundo, la sociedad que subsista.
5. Por cualquier otra causa que se establezca en los ordenamientos legales aplicables.

**Artículo 77.** Se consideran causas de revocación del certificado de firma electrónica avanzada, las siguientes:

1. Por solicitud de la persona firmante, poderdante o representada.
2. Por resolución judicial o administrativa que lo ordene.
3. Cuando se disuelvan, liquiden o extingan las sociedades, asociaciones y demás personas morales. En este caso, serán las personas liquidadoras quienes presenten la solicitud correspondiente.
4. Cuando la sociedad escindente o la sociedad fusionada desaparezcan con motivo de la escisión o fusión, respectivamente. En el primer caso, la revocación la podrá solicitar cualquiera de las sociedades escindidas; en el segundo, la sociedad que subsista.
5. Cuando se compruebe que, al momento de su expedición, el certificado no cumplió los requisitos legales, situación que no afectará los derechos de terceras personas de buena fe.
6. Cuando se ponga en riesgo la confidencialidad de los datos de creación de la firma electrónica avanzada.
7. Cuando se compruebe que los documentos que presentó la persona titular de un certificado de firma electrónica avanzada para acreditar su identidad, son falsos.
8. Cuando termine el empleo, cargo o comisión de la o el servidor público, por la cual se le haya sido concedido el uso de la firma electrónica avanzada.
9. Por la modificación en las circunstancias de la o el firmante que ya no correspondan con los datos contenidos en el certificado de firma electrónica avanzada.
10. Por uso indebido del certificado de firma electrónica avanzada.
11. Por cualquier otra que se establezca en el certificado de firma electrónica avanzada.

Cuando las autoridades certificadoras o las prestadoras de servicios de certificación revoquen un certificado expedido por cualquiera de ellas, se registrará en la lista de certificados revocados publicada en su sitio web.

**Artículo 78.** Verificada la causa de revocación del certificado de firma electrónica avanzada por la autoridad certificadora o por la prestadora de servicios de certificación, estas publicarán inmediatamente tal circunstancia de revocación, en su servicio de consulta establecido en su sitio web.

La autoridad certificadora o la prestadora de servicios de certificación comunicará a la o el firmante acerca de la revocación del certificado de firma electrónica avanzada especificando la causa por la cual queda sin efectos.

La revocación del certificado de firma electrónica avanzada comienza a surtir efectos a partir del momento en que la autoridad certificadora o la prestadora de servicios de certificación la hace pública en su servicio de consulta, establecido en su sitio web.

**Artículo 79.** Se consideran causas de extinción del certificado de firma electrónica avanzada, las siguientes:

1. Por fallecimiento de la persona física titular del certificado. En este caso la extinción deberá solicitarse por una tercera persona legalmente autorizada, quien deberá acompañar el acta de defunción correspondiente.
2. Incapacidad declarada judicialmente de la persona firmante o poderdante.
3. Extinción de la persona moral titular del certificado de firma electrónica avanzada.
4. Terminación del periodo de vigencia establecido en el certificado de firma electrónica avanzada.
5. Revocación del certificado de firma electrónica avanzada, a solicitud expresa de la persona titular o poderdante.
6. Terminación del empleo, cargo o comisión de la o el servidor público, por el cual se le haya sido concedido el uso de la firma electrónica avanzada.
7. Resolución judicial o administrativa que lo ordene.
8. Pérdida o inutilización por daños al dispositivo de conservación del certificado de firma electrónica avanzada; salvo que por otros medios se pueda comprobar su existencia.
9. Incumplimiento de alguno de los requisitos establecidos en la presente Ley para la expedición del certificado de firma electrónica avanzada.
10. Modificación en las circunstancias de la o el firmante que ya no correspondan con los datos contenidos en el certificado de firma electrónica avanzada.
11. Cualquier otra que se establezca en el certificado de firma electrónica avanzada.

**Artículo 80.** Tan pronto como se haga del conocimiento de la autoridad certificadora o de la prestadora de servicios de certificación, alguna de las causales de extinción de un certificado de firma electrónica avanzada, esta deberá actualizar de manera inmediata el servicio de consulta y autenticación de certificados expedidos por esa, para reflejar el estado de expiración del certificado correspondiente. En dicho caso dará aviso inmediato a la persona titular o representante legal acerca de la fecha y hora de extinción del certificado de firma electrónica avanzada.

La suspensión, revocación o extinción del certificado de firma electrónica avanzada no tiene efectos retroactivos.

**Artículo 81.** La pérdida de eficacia de los certificados de firma electrónica avanzada, en el supuesto de expiración de vigencia, tendrá lugar desde que esta circunstancia se produzca.

En los demás casos, la extinción de un certificado de firma electrónica avanzada surtirá efectos desde la fecha en que la autoridad certificadora o la prestadora de servicios de certificación tenga conocimiento cierto de la causa que la origina, y así lo haga constar en el Registro de Certificados publicado en su sitio web.

**Artículo 82.** Cuando una persona se separe de su encargo en el servicio público y cuente con un certificado de firma electrónica avanzada que utiliza en virtud de sus funciones, en adición a que se realice el trámite correspondiente para la extinción del mismo, quien sea su superior jerárquico deberá notificar a la instancia correspondiente para cancelar dicha anotación dentro del Registro de Certificados, o del registro correspondiente, conforme a lo establecido en esta Ley.

En caso de que no se presentase la solicitud mencionada en el párrafo anterior, y la persona que dejó su encargo como servidora o servidor público ocasione un daño o perjuicio en contra de una tercera persona o del órgano del Estado donde se encontraba adscrita, quien tenga superioridad jerárquica y haya incurrido en omisión será solidariamente responsable por la comisión de dichos actos.

**SECCIÓN SÉPTIMA**

**DE LOS DISPOSITIVOS DE CREACIÓN Y VERIFICACIÓN**

**DE LA FIRMA ELECTRÓNICA AVANZADA**

**Artículo 83.** Los dispositivos de creación de la firma electrónica avanzada deberán garantizar como mínimo, lo siguiente:

1. Que los datos utilizados al momento de crear la firma electrónica avanzada solo puedan ser usados en esa ocasión.
2. Que exista una seguridad suficiente que permita conocer que los datos utilizados para la generación de la firma electrónica avanzada no derivan del proceso de verificación o de la propia firma electrónica avanzada.
3. Que la firma electrónica avanzada sea infalsificable sin importar la tecnología de la información y comunicaciones que se utilice.
4. Que los datos de creación de la firma electrónica avanzada puedan ser protegidos por la o el titular del certificado de firma electrónica avanzada y que se impida su utilización por terceras personas.
5. Que el dispositivo utilizado para la creación de la firma electrónica avanzada no realice alteración alguna a los mensajes de datos o documentos digitales que deban signarse, y que estos puedan visualizarse por la o el titular de la firma electrónica avanzada previo a su signado.

**Artículo 84.** Los dispositivos de verificación de firma electrónica avanzada garantizarán que el proceso de verificación de esta satisfaga, al menos, los siguientes requisitos:

1. Que los datos utilizados para verificar la firma electrónica avanzada correspondan a aquellos mostrados a la persona que la verifica.
2. Que el proceso de verificación sea fiable y que el resultado de dicho proceso se presente de manera correcta.
3. Que la persona que verifica la firma electrónica avanzada pueda corroborar la autenticidad y validez de los mensajes de datos y documentos digitales signados y, en su caso, detectar las alteraciones a los que estos hayan sido sujetos.
4. Que se pueda verificar la identidad de la o el firmante.
5. Que pueda detectarse cualquier alteración o vulneración relativa a la seguridad informática relacionada con el uso de la firma electrónica avanzada.

Aquella información referente a la verificación de la firma electrónica avanzada podrá ser almacenada por quien realizó dicho proceso o por una tercera persona, de acuerdo con sus intereses.

**SECCIÓN OCTAVA**

**DE LAS DISPOSICIONES COMUNES PARA LAS AUTORIDADES CERTIFICADORAS Y PRESTADORAS DE SERVICIOS DE CERTIFICACIÓN**

**Artículo 85.** Las autoridades certificadoras y las prestadoras de servicios de certificación deberán contar dentro de su sitio web, con una base de datos pública, en la que se pueda consultar la siguiente información:

1. El código de identificación único o número de serie de los certificados de firma electrónica avanzada emitidos por estas.
2. El nombre, denominación o razón social de la autoridad certificadora o de la prestadora de servicios de certificación, emisor de los certificados de firma electrónica avanzada.
3. El domicilio electrónico de la autoridad certificadora o de la prestadora de servicios de certificación.
4. El periodo de vigencia de cada certificado de firma electrónica avanzada emitido, identificándolo por su código de identificación único o número de serie.
5. La fecha y hora de la expedición, suspensión, revocación, extinción o renovación del certificado de cada firma electrónica avanzada emitida, identificándolo por su código de identificación único o número de serie.

La información establecida en las fracciones VII, VIII, IX y X del artículo 74 de esta Ley, no podrá encontrarse en la base de datos mencionada en este precepto, debiendo resguardarse dichos datos conforme a lo establecido en la Ley de Protección de Datos Personales del Estado de Chihuahua y demás normatividad aplicable.

**Artículo 86.** Las autoridades certificadoras y las prestadoras de servicios de certificación podrán prestar los siguientes servicios:

1. Otorgar a las personas físicas y morales y a los órganos del Estado, los certificados digitales de firma electrónica avanzada solicitados y prestar servicios relacionados con la certificación.
2. La emisión de constancias de conservación de mensajes de datos.
3. La expedición de sellos digitales de tiempo, derivado del uso de los certificados de firma electrónica avanzada.

**Artículo 87.** Las autoridades certificadoras y las prestadoras de servicios de certificación tendrán las siguientes atribuciones:

1. Contar con un registro de certificados de firma electrónica avanzada expedidos por estas.
2. Publicar en su sitio web la base de datos establecida en el artículo 85 de esta Ley.
3. Colaborar en el desarrollo de sistemas informáticos y demás herramientas tecnológicas para la prestación de servicios relacionados con la firma electrónica avanzada.
4. Recibir las solicitudes para la creación de los certificados de firma electrónica avanzada y realizar el procedimiento para su expedición, conforme a lo establecido en el Reglamento de esta Ley.
5. Adoptar las Normas Oficiales Mexicanas y estándares emitidos por las autoridades certificadoras mencionadas en la Ley de Firma Electrónica Avanzada del Estado de Chihuahua, para efecto de homologar los criterios técnicos que operarán en la creación y uso de los certificados de firma electrónica avanzada.
6. Expedir o negar la expedición de los certificados de firma electrónica avanzada, de acuerdo con lo establecido en esta Ley y su Reglamento.
7. Facilitar a la persona solicitante un certificado de firma electrónica avanzada, los mecanismos necesarios para la generación de sus claves privada y pública, en forma secreta y bajo su total control.
8. Contar con medidas de seguridad para proteger la infraestructura tecnológica, los procesos, la información y los datos derivados de su operación.
9. Contar con medidas y mecanismos de respaldo de información, de acuerdo con la normatividad establecida en la materia.
10. Asesorar y capacitar, previa solicitud o convenio, a los órganos del Estado, en el manejo y utilización de la firma electrónica avanzada, cuando así se solicite por dichas instituciones.
11. Actualizar la tecnología aplicada al uso de la firma electrónica avanzada, de conformidad con los estándares emitidos en la Estrategia General de TIC.
12. Desarrollar un programa de calidad para la mejora continua de las TIC en la creación de certificados de firma electrónica avanzada; en el caso de las autoridades certificadoras establecidas en las fracciones I a III del artículo 93 de esta Ley, ponerlo a la consideración de la Secretaría Técnica.
13. Decretar y realizar los procedimientos para la extinción, suspensión y revocación de los certificados de firma electrónica avanzada, inmediatamente después de tener conocimiento de cualquiera de los supuestos previstos en esta Ley.
14. En el caso de las autoridades certificadoras establecidas en las fracciones I a III del artículo 93 de esta Ley, ejecutar los lineamientos emitidos por el Consejo, que garanticen la integridad, confidencialidad y autenticidad de la información y de la firma electrónica avanzada, contenidas en los mensajes de datos y documentos digitales.
15. Difundir en sus portales informativos los requisitos que debe cubrir la o el solicitante y el procedimiento para la creación de los certificados de firma electrónica avanzada, de acuerdo con lo establecido en el Reglamento de esta Ley.
16. Emitir certificados de firma electrónica avanzada en los casos en que se requiera el firmado masivo de documentos digitales.
17. Establecer los procesos que permitan la obtención de los certificados de firma electrónica avanzada por medio del uso de portales transaccionales, aplicaciones móviles y cualquier otro medio o TIC que permita una comunicación en tiempo real entre la o el solicitante y la persona adscrita a la autoridad certificadora o prestadora de servicios de certificación correspondiente.
18. Las demás que les otorgue esta Ley, su Reglamento y demás disposiciones, lineamientos e instrumentos complementarios emitidos por el Consejo.

**Artículo 88.** Las autoridades certificadoras y las prestadoras de servicios de certificación, previo a la expedición del certificado de firma electrónica avanzada, deberán informar lo siguiente:

1. Las obligaciones de la o el titular de la firma electrónica avanzada, en términos de lo establecido en esta Ley.
2. La forma en que han de custodiarse los datos de creación de la firma electrónica avanzada.
3. El procedimiento que deberá seguirse para comunicar la pérdida o posible utilización indebida de dichos datos.
4. Los mecanismos para garantizar la fiabilidad de la firma electrónica avanzada.
5. El método utilizado por la autoridad certificadora o por la prestadora de servicios de certificación, para comprobar la identidad de la o el firmante.
6. Las condiciones precisas de utilización del certificado de firma electrónica avanzada, sus posibles límites de uso y la forma en que la autoridad certificadora o la prestadora de servicios de certificación correspondiente garantizará su responsabilidad.

La información mencionada en este artículo deberá ser otorgada de forma gratuita a las personas solicitantes y deberá entregarse por escrito en soporte físico, vía digital o por cualquier otro medio que se considere pertinente.

**Artículo 89.** Las autoridades certificadoras y las prestadoras de servicios de certificación estarán obligadas a:

1. Indicar en la base de datos la fecha y la hora en las que se expidió o se dejó sin efecto un certificado de firma electrónica avanzada.
2. Contar con un registro o base de datos de los certificados de firma electrónica avanzada emitidos, renovados, suspendidos, revocados y extintos, así como proveer los servicios de consulta a las personas interesadas, debiendo observar las disposiciones referentes a la protección, consulta y resguardo de los datos personales, de acuerdo con lo establecido en esta Ley, en la Ley de Protección de Datos Personales del Estado de Chihuahua y en las demás disposiciones aplicables a la materia de protección de datos personales.
3. Comprobar por los medios idóneos autorizados por las leyes, la identidad y cualesquiera circunstancia personal de las y los solicitantes que pudiera resultar relevante para la emisión de los certificados de firma electrónica avanzada.
4. Guardar confidencialidad respecto de la información que haya recibido por motivo de los servicios prestados de acuerdo con lo establecido en esta Ley.
5. Previo a la expedición de un certificado de firma electrónica avanzada, informar a las y los solicitantes de los servicios establecidos en el artículo 86 de esta Ley, en los casos que así se prevea, sobre el costo, características y las condiciones precisas sobre los servicios mencionados.
6. Conservar toda la información y documentación física o digital relativa a un certificado de firma electrónica avanzada, durante diez años contados a partir de la fecha de su expedición.
7. Adoptar las medidas necesarias para evitar la falsificación, alteración o uso indebido de certificados de firma electrónica avanzada, así como de los servicios relacionados con esta.
8. Cumplir con las demás obligaciones que deriven de esta Ley, su Reglamento y otras disposiciones jurídicas aplicables.

**Artículo 90.** Cuando las autoridades certificadoras y las prestadoras de servicios de certificación expidan certificados de firma electrónica avanzada, únicamente podrán recabar datos personales directamente de las y los titulares de estos o con su consentimiento explícito. Los datos requeridos serán, exclusivamente, los necesarios para la expedición y el mantenimiento del certificado de firma electrónica avanzada.

**Artículo 91.** Las autoridades certificadoras y las prestadoras de servicios de certificación serán responsables de los daños y perjuicios que en el ejercicio de su actividad ocasionen por la certificación u homologación de certificados de firma electrónica avanzada. En todo caso, corresponderá a estas, demostrar que actuaron con diligencia.

Sin perjuicio de lo señalado en el párrafo anterior, la autoridad certificadora o la prestadora de servicios de certificación no será responsable de los daños que tengan su origen en el uso indebido o fraudulento de un certificado de firma electrónica avanzada.

**Artículo 92.** Las autoridades certificadoras y las prestadoras de servicios de certificación no serán responsables de los daños y perjuicios ocasionados a la o el firmante, si incurre en alguno de los siguientes supuestos:

1. No haber proporcionado a la autoridad certificadora o prestadora de servicios de certificación correspondiente, información veraz, completa y exacta sobre los datos que deban constar en el certificado de firma electrónica avanzada o que sean necesarios para su expedición, renovación, suspensión, revocación o extinción de su vigencia.
2. Actuar con negligencia en la conservación de los datos de creación de firma electrónica avanzada, en el aseguramiento de su confidencialidad y en la protección de todo acceso o revelación.
3. No solicitar la suspensión, revocación o extinción del certificado de firma electrónica avanzada si esta fue usada sin el consentimiento de su titular.
4. Utilizar los datos de creación de firma electrónica avanzada cuando haya expirado la vigencia del certificado de firma electrónica avanzada.
5. Utilizar el certificado de manera diferente a las condiciones establecidas y comunicadas a la o el firmante, por parte de la autoridad certificadora o prestadora de servicios de certificación correspondiente.
6. Actuar de manera negligente, especialmente, cuando no compruebe y tenga en cuenta las restricciones que figuren en el certificado de firma electrónica avanzada en cuanto a sus posibles usos.
7. Uso indebido o fraudulento de la firma electrónica avanzada.

**SECCIÓN NOVENA**

**DE LAS AUTORIDADES CERTIFICADORAS**

**Artículo 93.** Para los efectos de esta Ley, dentro del Estado son autoridades certificadoras:

1. La Coordinación.
2. La Secretaría de la Función Pública.
3. La Secretaría de Hacienda.
4. El Poder Legislativo.
5. El Poder Judicial.
6. Los organismos con autonomía constitucional.
7. Los ayuntamientos.

**Artículo 94.** Los órganos del Estado podrán celebrar convenio de colaboración con las autoridades certificadoras establecidas en la Ley de Firma Electrónica Avanzada del Estado de Chihuahua, a efecto de que estas últimas, provean el servicio de expedición de certificados de firma electrónica avanzada y estos certificados sean válidos en los trámites, servicios, procesos y procedimientos administrativos o jurisdiccionales, comunicaciones y demás actos que se encuentren bajo la competencia de los órganos del Estado.

**SECCIÓN DÉCIMA**

**DE LAS PRESTADORAS DE SERVICIOS DE CERTIFICACIÓN**

**Artículo 95.** Serán prestadoras de servicios de certificación aquellas personas físicas o morales y titulares de notarías públicas autorizadas por las autoridades certificadoras para prestar los servicios establecidos en el artículo 86 de esta Ley.

**Artículo 96.** Las personas que deseen realizar las funciones de una prestadora de servicios de certificación deberán presentar la solicitud correspondiente ante cualquiera de las autoridades certificadoras, debiendo entregar cada uno de los requisitos que se establecen en el Reglamento.

**Artículo 97.** Las personas que soliciten la autorización para actuar como prestadoras de servicios de certificación, así como las autoridades certificadoras deberán observar las disposiciones procedimentales que se establecen en el Reglamento.

**Artículo 98.** Las personas solicitantes de la autorización para actuar como prestadoras de servicios de certificación deberán cumplir con las siguientes obligaciones:

1. Demostrar la fiabilidad necesaria para prestar servicios de certificación, de acuerdo con los lineamientos establecidos en esta Ley y su Reglamento.
2. Otorgar las garantías que permitan determinar con precisión la fecha y hora en las que se expidió, renovó, suspendió, revocó o extinguió un certificado de firma electrónica avanzada.
3. Emplear personal con los conocimientos, calificación y experiencia necesarios para la prestación de los servicios de certificación ofrecidos, así como para la ejecución de los procedimientos de seguridad informática relacionados con los servicios establecidos en el artículo 86 de esta Ley.
4. Utilizar sistemas y productos que permitan contar con la fiabilidad suficiente y que eviten la realización de toda alteración a los servicios prestados, garantizando la seguridad de los procedimientos relacionados con ellos.
5. Establecer medidas, procedimientos y protocolos que se establezcan para evitar la falsificación de los certificados de firma electrónica avanzada.
6. Garantizar la confidencialidad de los datos personales generados y obtenidos mediante los procedimientos relacionados con los servicios prestados, de conformidad con el artículo 86 de esta Ley.
7. Resguardar los datos mencionados en la fracción anterior, por un periodo mínimo de diez años, contados desde el momento en el que se realizó el servicio respectivo.
8. Contar con sistemas y demás TIC que permitan corroborar la autenticidad de los certificados de firma electrónica avanzada.
9. Habilitar sistemas y demás TIC que eviten la alteración de datos o de cualquier otra información generada u obtenida por la prestación de los servicios mencionados en el artículo 86 de esta Ley.
10. Contar con sistemas y demás TIC que permitan conocer de manera fiable los datos y demás información relacionada con ataques cibernéticos e intento de alteración de datos correspondientes a los servicios otorgados de conformidad con el artículo 86 de esta Ley.
11. Contratar un seguro de responsabilidad civil que permita el resarcimiento de los daños y perjuicios que se pudiesen ocasionar por alguna acción u omisión cometida por parte del personal de las prestadoras de servicios de certificación, mismo que deberá permanecer vigente durante el tiempo en que se presten los servicios de certificación.

**Artículo 99.** Las autorizaciones para actuar como prestadoras de servicios de certificación tendrán el carácter de permanentes y deberán ser publicadas en el Periódico Oficial del Estado, dentro de los primeros diez días hábiles posteriores a la emisión de la resolución respectiva.

**Artículo 100.** En caso de que la resolución emitida resulte en la negativa de autorización y acreditación de una persona física o moral como prestadora de servicios de certificación, procederán los medios de impugnación previstos en la Ley de Procedimiento Administrativo del Estado de Chihuahua.

**Artículo 101.** Las autoridades certificadoras tendrán la facultad de realizar inspecciones a las prestadoras de servicios de certificación que hayan autorizado, con la finalidad de vigilar el correcto funcionamiento de los servicios otorgados por estas.

El Reglamento deberá establecer el procedimiento que habrá de seguirse para la realización de la inspección mencionada en el párrafo anterior.

**Artículo 102.** Las autoridades certificadoras deberán contar con un registro público de prestadoras de servicios de certificación, el cual estará disponible en el portal informativo de la propia autoridad certificadora, para su consulta por el público en general.

El registro público de prestadoras de servicios de certificación deberá contar con los siguientes datos:

1. Para el caso de personas físicas y titulares de notarías públicas:
	1. Nombre completo de la persona autorizada.
	2. CURP de la persona autorizada.
	3. RFC de la persona autorizada.
	4. Domicilio convencional y domicilio electrónico de la persona autorizada.
	5. Número de folio en el que se expidió la autorización y acreditación para actuar como prestadora de servicios de certificación.
	6. Fecha de expedición de la autorización y acreditación para actuar como prestadora de servicios de certificación.
	7. Para el caso de personas titulares de notarías públicas, número de notaría a la que está adscrita.
	8. Actividad o actividades que se le autorizó realizar, conforme a las establecidas en el artículo 86 de esta Ley.
	9. Sitio web de la persona autorizada.
2. Para el caso de personas morales:
	1. Razón o denominación social de la persona autorizada.
	2. RFC de la persona autorizada.
	3. Nombre de quien represente legalmente a la persona autorizada.
	4. CURP de quien represente legalmente a la persona autorizada.
	5. RFC de quien represente legalmente a la persona autorizada.
	6. Domicilio convencional y domicilio electrónico de la persona autorizada.
	7. Número de folio en el que se expidió la autorización y acreditación para actuar como prestadora de servicios de certificación.
	8. Fecha de expedición de la autorización y acreditación para actuar como prestadora de servicios de certificación.
	9. Actividad o actividades que se le acreditó realizar, conforme a las establecidas en el artículo 86 de esta Ley.
	10. Sitio web de la persona autorizada.

**Artículo 103.** La prestadora de servicios de certificación que tenga la intención de cesar en sus actividades bajo ese carácter, deberá comunicar de dicha situación a la autoridad certificadora que expidió su acreditación, así como a las y los titulares de los certificados de firma electrónica avanzada expedidos por esta, a las y los solicitantes de estos y a toda aquella persona a la que le provea cualquiera de los servicios establecidos en el artículo 86 de esta Ley.

El aviso mencionado en el párrafo anterior, independientemente de su destinatario, deberá ser presentado a más tardar dentro de los ciento veinte días hábiles anteriores a aquel en el que se cesarán las actividades de la prestadora de servicios de certificación.

La remisión del aviso establecido en este artículo se realizará al domicilio electrónico de los destinatarios, el cual fue otorgado al momento de solicitar cualquiera de los servicios establecidos en el artículo 86 de esta Ley, según corresponda.

La autoridad certificadora conocedora del aviso a que se refiere este artículo, deberá solicitar la publicación en el Periódico Oficial del Estado acerca del cese de actividades de una prestadora de servicios de certificación.

**Artículo 104.** El aviso que se haga a las y los titulares de los certificados de firma electrónica avanzada en términos del artículo anterior, deberá contener un apartado en el que se comunique que bajo el consentimiento expreso de dichas personas, la prestadora de servicios de certificación podrá transferir a otra persona con dicho carácter, toda aquella información y demás datos relacionados de los certificados de firma electrónica avanzada que se encuentren vigentes, con la finalidad de que puedan seguir siendo utilizados, o que, en su caso, se realice la extinción del certificado respectivo, conforme al procedimiento que establezca el Reglamento.

**Artículo 105.** El aviso a las personas usuarias sobre la cesación de actividades como prestadoras de servicios de certificación deberá contener un apartado en el que se les comunique que dichos servicios podrán ser adquiridos ante otra prestadora de servicios de certificación acreditada, debiendo otorgar un listado de estas.

**Artículo 106.** Para la rescisión de un contrato de prestación de servicios relacionados con aquellos previstos en el artículo 86 de esta Ley, que se encuentre vigente al momento en el que se realice la cesación de actividades de la prestadora de servicios de certificación, en el que esta y una persona física, moral u órgano del Estado sean parte, se tendrá que atender a lo establecido en la legislación civil, mercantil o administrativa, según corresponda.

**CAPÍTULO SEGUNDO**

**DE LOS PORTALES INFORMATIVOS**

**Artículo 107.** Los portales informativos son los espacios dentro de los sitios web de los órganos del Estado en los que se pueden consultar los datos e información de carácter público referente a las actividades que realizan dichas instituciones, de conformidad con lo establecido en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Chihuahua y en la Ley de Mejora Regulatoria del Estado de Chihuahua.

**Artículo 108.** En el caso del Poder Ejecutivo, para la construcción de los portales informativos, se deberá observar la arquitectura de gobierno digital y los estándares aprobados por el Consejo, así como las disposiciones establecidas en la Estrategia General de TIC.

En lo que respecta a los órganos del Estado establecidos en las fracciones II a V del artículo 3 de esta Ley, se deberá observar la arquitectura de gobierno digital, así como las disposiciones que cada órgano establezca para la implementación de la política pública del gobierno digital.

**Artículo 109.** Para su consulta, los órganos del Estado habilitarán portales informativos dentro de sus sitios web, debiendo también integrarlos dentro de la ventanilla virtual, siguiendo los lineamientos establecidos por el Consejo respecto a este rubro.

**Artículo 110.** Además de la información a la que se refiere la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Chihuahua, los órganos del Estado podrán poner a disposición de las y los particulares aquella que se estime conveniente, debiendo observar las disposiciones establecidas en la Ley de Protección de Datos Personales del Estado de Chihuahua.

**CAPÍTULO TERCERO**

**DE LOS PORTALES TRANSACCIONALES**

**Artículo 111.** Los portales transaccionales son los medios por los cuales, las y los particulares, haciendo uso de TIC podrán realizar la solicitud, gestión y sustanciación de los trámites, servicios, procesos y procedimientos administrativos o jurisdiccionales, comunicaciones y demás actos que recaigan dentro de la competencia de los órganos del Estado.

A su vez, los órganos del Estado podrán resolver los trámites, servicios, procesos y procedimientos administrativos o jurisdiccionales, comunicaciones y demás actos que recaigan dentro de su competencia, haciendo uso de los portales transaccionales, así como interactuar con las y los particulares a lo largo de la sustanciación de estos.

**Artículo 112.** Los portales transaccionales deberán estar disponibles para el público en general, tanto en los sitios web de los órganos del Estado como en la ventanilla virtual.

**Artículo 113.** En el caso del Poder Ejecutivo, para la construcción de los portales transaccionales, se deberán observar las disposiciones establecidas en la arquitectura de gobierno digital y en los estándares aprobados por el Consejo, así como en Estrategia General de TIC.

En lo que respecta a los órganos del Estado establecidos en las fracciones II a V del artículo 3 de esta Ley, se deberá observar la arquitectura de gobierno digital, así como las disposiciones que cada órgano establezca para la implementación de la política pública del gobierno digital.

**Artículo 114.** Los órganos del Estado deberán poner a disposición de las y los particulares, en portales transaccionales, todos los trámites, servicios, procesos y procedimientos administrativos o jurisdiccionales, comunicaciones y demás actos que recaigan dentro de su competencia, siempre que su naturaleza lo permita y que no se establezca alguna restricción, formalidad o solemnidad que impida la utilización de las TIC en ellos.

**Artículo 115.** En el caso de que las o los servidores públicos adscritos a los órganos del Estado requieran hacer uso de los portales transaccionales para el desempeño de las funciones que tienen encomendadas de acuerdo con su encargo, deberán contar con un certificado de firma electrónica avanzada.

**Artículo 116.** Los órganos del Estado, de acuerdo con la naturaleza y requisitos de los trámites, servicios, procesos o procedimientos administrativos o jurisdiccionales, comunicaciones o cualquier otro acto que recaiga dentro de su competencia, podrán establecer como requisito para la solicitud y gestión de estos, el uso de la firma electrónica avanzada, cuando sean solicitados por medio de portales transaccionales.

De acuerdo con el número de solicitudes o por no ser necesario el uso de la firma electrónica avanzada, los órganos del Estado podrán excusar la utilización de esta herramienta en la petición y gestión de los trámites, servicios, procesos o procedimientos administrativos o jurisdiccionales, comunicaciones o cualquier otro acto que recaiga dentro de su competencia.

**Artículo 117.** El uso de portales transaccionales para la solicitud, gestión y sustanciación de los trámites, servicios, procesos y procedimientos administrativos y jurisdiccionales, comunicaciones y demás actos que se encuentren bajo la competencia de los órganos del Estado, es optativa, pudiendo solicitarse y gestionarse de manera física en las oficinas habilitadas por cada una de las instituciones.

**Artículo 118.** Cuando por medio de un portal transaccional se presente la solicitud de algún trámite, servicio, proceso o procedimiento administrativo o jurisdiccional, comunicación o cualquier otro acto que se encuentre bajo la competencia de los órganos del Estado, este deberá seguirse hasta su conclusión por dicha vía, siempre que su naturaleza así lo permita.

**Artículo 119.** Cuando por medio de portales transaccionales, las y los particulares presenten en hora o día inhábil algún escrito relacionado con la solicitud, gestión y sustanciación de los trámites, servicios, procesos y procedimientos administrativos y jurisdiccionales, comunicaciones y demás actos que se encuentren bajo la competencia de los órganos del Estado, estos se tendrán por presentados en la primera hora hábil del siguiente día hábil.

Para los casos no previstos por esta Ley, se entenderán conforme a lo señalado en la Ley de Procedimiento Administrativo del Estado de Chihuahua, así como en aquella legislación aplicable a cada trámite, servicio, proceso o procedimiento administrativo o jurisdiccional, comunicación o acto correspondiente.

**CAPÍTULO CUARTO**

**DE LA VENTANILLA VIRTUAL**

**Artículo 120.** La ventanilla virtual es el sitio web habilitado por la Coordinación, donde las y los particulares podrán obtener información pública puesta a su disposición por parte de los órganos del Estado y realizar la solicitud y gestión de los trámites, servicios, procesos y procedimientos administrativos y jurisdiccionales, comunicaciones y demás actos que se encuentran bajo la competencia de las instituciones públicas del ámbito estatal y municipal.

**Artículo 121.** La ventanilla virtual estará compuesta por los siguientes instrumentos:

1. Los portales informativos.
2. Los portales transaccionales.
3. El Catálogo Estatal de Regulaciones, Trámites y Servicios.
4. El Registro de Certificados, así como los registros de certificados que habiliten los órganos del Estado establecidos en las fracciones II a V del artículo 3 de esta Ley.

**Artículo 122.** La administración, mantenimiento y custodia de la ventanilla virtual estará a cargo de la Coordinación, pudiendo apoyarse de las áreas o unidades administrativas en materia de informática que se encuentren adscritas a los órganos del Estado, para la realización de las funciones mencionadas en este artículo.

**Artículo 123.** Los órganos del Estado podrán sugerir a la Coordinación, las mejoras que estimen pertinentes para el pleno funcionamiento de la ventanilla virtual.

**Artículo 124.** Para la integración de los instrumentos mencionados en el artículo 121 de esta Ley, dentro de la ventanilla virtual, se deberá seguir el procedimiento que el Consejo establezca en las disposiciones, lineamientos y demás instrumentos complementarios emitidos por este.

**Artículo 125.** El Consejo deberá proponer a la persona titular del Poder Ejecutivo el presupuesto que se estima debe destinarse a la operación, mantenimiento y custodia de la ventanilla virtual, para presentarlo al Congreso del Estado dentro de la iniciativa del Presupuesto de Egresos de cada ejercicio fiscal.

**CAPÍTULO QUINTO**

**DEL REGISTRO DE CERTIFICADOS**

**Artículo 126.** El Registro de Certificados es el padrón donde se inscribirán las y los servidores públicos que dentro de sus facultades deban rubricar, autorizar, expedir, dar fe, firmar o emitir cualquier mensaje de datos o documento digital relacionado con la sustanciación y resolución de los trámites, servicios, procesos y procedimientos administrativos o jurisdiccionales, comunicaciones y demás actos que se encuentren bajo la competencia de las dependencias y entidades a los que están adscritos.

Los órganos del Estado establecidos en las fracciones II a V del artículo 3 de esta Ley, deberán habilitar su respectivo registro donde se inscriba a las y los servidores públicos que dentro de sus facultades deban rubricar, autorizar, expedir, dar fe, firmar o emitir cualquier mensaje de datos o documento digital relacionado con la sustanciación y resolución de los trámites, servicios, procesos y procedimientos administrativos o jurisdiccionales, comunicaciones y demás actos que se encuentren bajo su ámbito de competencia.

**Artículo 127.** El Registro de Certificados será administrado por la Secretaría de la Función Pública, quien deberá hacer las gestiones que resulten necesarias para integrar dicho padrón dentro de la ventanilla virtual.

**Artículo 128.** Las inscripciones de las y los servidores públicos dentro del Registro de Certificados se podrán realizar de manera digital o presencial, mediante el procedimiento que se establezca en el Reglamento.

**Artículo 129.** El Registro de Certificados será público y deberá contar con la siguiente información:

1. Nombre completo de la persona en ejercicio de funciones públicas.
2. Dependencia o entidad a la que se encuentra adscrita.
3. Cargo o comisión que desempeña.
4. Código único de identificación o número de serie del certificado de firma electrónica avanzada del cual es titular.
5. Autoridad certificadora o prestadora de servicios de certificación que expidió el certificado de firma electrónica avanzada registrado.
6. Fecha de expedición y vigencia del certificado de firma electrónica avanzada registrado.
7. Mensajes de datos o documentos que se encuentra facultada para rubricar, autorizar, expedir, dar fe, firmar o emitir.
8. Cualquier otra información que se disponga en esta Ley y su Reglamento, en atención a las disposiciones establecidas en la Ley de Protección de Datos Personales del Estado de Chihuahua.

**CAPÍTULO SEXTO**

**DE LAS APLICACIONES MÓVILES**

**Artículo 130.** Las aplicaciones móviles son los sistemas o programas informáticos que pueden ser utilizados en dispositivos móviles con acceso a internet, por medio de los cuales, los órganos del Estado podrán habilitar los portales informativos, portales transaccionales y demás instrumentos tecnológicos.

**Artículo 131.** En el caso del Poder Ejecutivo, para la construcción de las aplicaciones móviles, se deberá observar la arquitectura de gobierno digital y los estándares aprobados por el Consejo en la Estrategia General de TIC.

En lo que respecta a los órganos del Estado establecidos en las fracciones II a V del artículo 3 de esta Ley, se deberá observar la arquitectura de gobierno digital, así como las disposiciones que cada órgano establezca para la implementación de la política pública del gobierno digital.

**Artículo 132.** Los órganos del Estado podrán convenir entre ellos, la construcción de una sola aplicación móvil en la que se encuentren todos los portales informativos, portales transaccionales y demás instrumentos tecnológicos implementados por dichas instituciones.

**Artículo 133.** Las aplicaciones móviles de los órganos del Estado deberán ser compatibles con cualquier sistema operativo móvil, garantizando su acceso a cualquier persona que cuente con dispositivos móviles.

**Artículo 134.** Las autoridades certificadoras pertenecientes al Poder Ejecutivo y las prestadoras de servicios de certificación estarán facultadas para construir aplicaciones móviles que permitan el uso de los certificados de firma electrónica avanzada por medio de dichos programas o sistemas informáticos, debiendo observar la arquitectura de gobierno digital y los estándares que para ese efecto emita el Consejo, a través de la Estrategia General de TIC.

En lo que respecta a los órganos del Estado establecidos en las fracciones II a V del artículo 3 de esta Ley, se deberá observar la arquitectura de gobierno digital, así como las disposiciones que cada órgano establezca para la implementación de la política pública del gobierno digital.

**Artículo 135.** Además de los instrumentos establecidos en el artículo 130 de esta Ley, en las aplicaciones móviles podrá integrarse lo siguiente:

1. Los términos y condiciones referentes al uso de las aplicaciones móviles.
2. Cualquier información de interés general.
3. Información relacionada con aspectos de salud y crisis sanitarias.
4. Orientación para erradicar cualquier tipo de violencia en contra de las mujeres, grupos vulnerables y toda persona sin importar raza, sexo, ideología política, preferencia sexual, creencia religiosa o cualquier otra circunstancia que pueda poner en peligro su integridad.
5. Buzón de quejas y sugerencias sobre la atención obtenida por parte de las y los servidores públicos adscritos a los órganos del Estado.
6. Oficialía virtual de los Órganos Internos de Control para la presentación de cualquier denuncia o queja relacionada con las actuaciones de las y los servidores públicos de los órganos del Estado.
7. Botón de pánico para la atención por parte de los servicios de emergencia estatal o por los órganos de atención inmediata de los municipios.
8. Números telefónicos de contacto para la atención por parte de los servicios de emergencia estatales y municipales.
9. Pronóstico del clima a nivel estatal o, en particular, de cada uno de los municipios que integran la Entidad.
10. Alertas referentes a la materia de protección civil y seguridad ciudadana.
11. Información contenida en los sistemas de información estadística y geográfica, observando lo dispuesto en esta Ley y en la Ley de Protección de Datos Personales del Estado de Chihuahua.
12. Alerta Amber.
13. Visualización de las redes sociales institucionales habilitadas por los órganos del Estado.
14. Chat de atención ciudadana sobre cualquier asunto relacionado con las funciones de los órganos del Estado.
15. Noticias relacionadas con las funciones de los órganos del Estado.
16. Información relacionada con el cuidado del medio ambiente y de los recursos naturales con los que cuenta la Entidad.
17. Cualquier otro aspecto, función o información que los órganos del Estado estimen pertinentes.

**CAPÍTULO SÉPTIMO**

**DE LAS REDES SOCIALES INSTITUCIONALES**

**Artículo 136.** Los órganos del Estado deberán contar con cuentas de redes sociales institucionales que servirán como vínculos de comunicación social, para dar a conocer a la ciudadanía aquella información de relevancia para el público en general, siendo también, una vía para la atención de quejas, sugerencias y denuncias relacionadas con las funciones de las y los servidores públicos de los órganos del Estado.

**Artículo 137.** Las personas titulares de los órganos del Estado quedan facultadas para decidir las redes sociales que utilizarán bajo la modalidad establecida en esta Ley, debiendo ajustarse a los preceptos y lineamientos instituidos en esta norma.

**Artículo 138.** Las personas titulares de los órganos del Estado deberán designar a la o el servidor público que se encargará del manejo, custodia y control de las cuentas de las redes sociales institucionales, así como de la información que se publica en ellas.

La designación deberá constar por medio de escrito en el que se presenten los siguientes datos:

1. Nombre de la persona designada como encargada del manejo, custodia y control de las cuentas de redes sociales institucionales.
2. Área o unidad administrativa a la que se encuentra adscrita la persona designada.
3. Redes sociales que deberá manejar, custodiar y controlar.
4. Nombre de la persona titular del órgano del Estado que realiza la designación.
5. Órgano del Estado al que se encuentra adscrita la persona designada.
6. Fecha en la que se emite la designación respectiva.
7. Cualquier otro dato que la persona titular del órgano del Estado que realice la designación estime pertinente.

**Artículo 139.** Las publicaciones realizadas por medio de las redes sociales institucionales deberán conducirse con respeto a toda persona o institución.

Las personas encargadas del manejo, custodia y control de las cuentas de las redes sociales institucionales deberán actuar de manera que se garantice la protección de los derechos humanos y abstenerse de publicar información, datos o documentos que denigren, discriminen, vulneren la integridad de alguien o que falten a la verdad en perjuicio de la institución, de otro órgano del Estado, de una persona o de una colectividad.

**Artículo 140.** A través de los buzones de mensajes directos que se encuentren en las redes sociales institucionales, las y los particulares podrán presentar cualquier queja o sugerencia relacionada con el actuar de las y los servidores públicos que se encuentren adscritos a los órganos del Estado.

Las y los servidores públicos encargados del manejo, custodia y control de las redes sociales institucionales deberán canalizar la queja o sugerencia mencionada en el párrafo anterior, a los Órganos Internos de Control o a las áreas o unidades administrativas que correspondan, de acuerdo con los procedimientos establecidos en la normatividad aplicable.

**Artículo 141.** Las personastitulares de los órganos del Estado o las personas designadas para el manejo, custodia y control de las redes sociales institucionales, bajo ninguna circunstancia podrán bloquear o impedir que persona o institución alguna pueda tener acceso a la información, datos y documentos que se publican en dichas cuentas.

**Artículo 142.** A la conclusión del ejercicio constitucional correspondiente, o bien, al finalizar el ejercicio de su cargo o comisión, las personas designadas para el manejo, custodia y control de las redes sociales institucionales deberán elaborar un oficio con la información contenida en las fracciones III y IV el artículo 138 de esta Ley, con la finalidad de que este pueda constar en el acta de entrega-recepción correspondiente. Lo mismo se realizará en los casos en los que la persona titular del órgano del Estado decida otorgar la designación a una persona distinta a la que previamente se hubiera otorgado.

**Artículo 143.** En las redes sociales institucionales podrá publicarse la siguiente información:

1. De interés general.
2. Relacionada con aspectos de salud y crisis sanitarias.
3. Que tenga como finalidad erradicar la violencia en contra de las mujeres, grupos vulnerables y toda persona sin importar raza, sexo, ideología política, orientación sexual, creencia religiosa o cualquier otra circunstancia que pueda poner en peligro su integridad.
4. Las formas en las que podrán presentarse quejas y sugerencias sobre la atención obtenida por parte de las y los servidores públicos de los órganos del Estado.
5. Números telefónicos de contacto para la atención por parte de los servicios de emergencia estatales y municipales.
6. Pronóstico del clima a nivel estatal o, en particular, de cada uno de los municipios que integran la Entidad.
7. Alertas referentes a la materia de protección civil y seguridad ciudadana.
8. Alerta Amber.
9. Noticias relacionadas con las funciones de los órganos del Estado.
10. Relacionada con el cuidado del medio ambiente y de los recursos naturales con los que cuenta la Entidad.
11. Datos y documentos relacionados con las funciones y atribuciones de los órganos del Estado.
12. Referente a la promoción turística y económica de la Entidad o de sus municipios.
13. Referente a programas de asistencia social.
14. Relacionada con servicios a la comunidad.
15. Referente a la promoción de la cultura dentro de la Entidad.
16. Enlaces de acceso a otras redes sociales, a los portales informativos, portales transaccionales, a los instrumentos tecnológicos habilitados por los órganos del Estado y a sus sitios web.
17. Relacionada con los programas y acciones llevadas a cabo por los órganos del Estado.
18. Comunicados de prensa.
19. Números telefónicos y correos electrónicos de atención ciudadana dentro de los órganos del Estado respectivos.
20. Demás información que se estime pertinente, debiendo observar las disposiciones de esta Ley y de la Ley de Protección de Datos Personales del Estado de Chihuahua.

**CAPÍTULO OCTAVO**

**DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN ESTADÍSTICA Y GEOGRÁFICA**

**Artículo 144.** Los SIG son los programas informáticos en los que se encontrarán inscritos aquellos datos georreferenciados generados por las funciones desempeñadas por los órganos del Estado y que podrán estar disponibles para su consulta por parte de las y los servidores públicos de dichas instituciones y para el público en general.

**Artículo 145.** Cada uno de los órganos del Estado procurará construir un SIG, de acuerdo con los datos con los que cuente dicha Institución, debiendo observar las disposiciones y restricciones que establece esta Ley y la Ley de Protección de Datos Personales del Estado de Chihuahua.

**Artículo 146.** En los SIG podrá encontrarse información publicada por instituciones del ámbito internacional, federal, de otras entidades federativas, de municipios o alcaldías de otras entidades federativas o del sector privado, social y académico, siempre que no se vulnere lo establecido en esta Ley y en la Ley de Protección de Datos Personales del Estado de Chihuahua.

**Artículo 147.** Los SIG que construyan los órganos del Estado deberán contar con una versión pública, la cual deberá ajustarse a las restricciones establecidas en la Ley de Protección de Datos Personales del Estado de Chihuahua.

Las versiones públicas de los SIG podrán encontrarse disponibles en los portales informativos, portales transaccionales y en las aplicaciones móviles que habiliten los órganos del Estado.

**Artículo 148.** El Poder Ejecutivo deberá catalogar la información que es susceptible de encontrarse en un SIG, de acuerdo con los datos con los que cuenten dichas instituciones, debiendo considerar el criterio de georreferenciación de datos conforme a lo establecido en las disposiciones, lineamientos y demás instrumentos que emita el Consejo.

En lo que respecta a los órganos del Estado establecidos en las fracciones II a V del artículo 3 de esta Ley, se deberán observar las disposiciones que cada órgano establezca para la implementación de la política pública del gobierno digital.

**Artículo 149.** Los órganos del Estado se encuentran facultados para suscribir los instrumentos jurídicos que estimen necesarios para compartir la información que se encuentre almacenada en los SIG construidos por estos, debiendo observar las disposiciones en materia de protección de datos personales.

**Artículo 150.** Los SIG que construyan los órganos del Estado deberán ser interoperables entre sí.

**Artículo 151.** Para el caso del Poder Ejecutivo, la Coordinación será la instancia encargada de la integración de los SIG que construyan las dependencias y entidades en un solo programa, que deberá estar disponible para los demás órganos del Estado y para el público en general, de acuerdo con lo establecido en esta Ley y su Reglamento.

**Artículo 152.** Los datos que deberán estar disponibles para el público en general, en todo momento, serán los referentes a los siguientes temas:

**I.** Nomenclatura de calles y avenidas.

**II.** División territorial bajo los siguientes criterios:

**a)** Colonias, barrios, pueblos o rancherías.

**b)** Localidades.

**c)** Municipios.

**d)** Estado.

**III.** Ubicación de unidades económicas.

**IV.** Cualquier información referente a los comercios y a la materia de Desarrollo Económico.

**V.** Ubicación de redes hidráulicas y cuerpos de agua naturales y artificiales.

**VI.** Orografía, hidrografía y accidentes geográficos dentro de la Entidad.

**VII.** Accesos y rutas de evacuación en materia de protección civil.

**VIII.** Ubicación de zonas de riesgo.

**IX.** Ubicación de albergues en la atención de emergencias y fenómenos naturales.

**X.** Planes Municipales de Desarrollo Urbano.

**XI.** Plan Estatal de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano.

**XII.** Usos de suelo.

**XIII.** Caminos, puentes, carreteras, sistema ferroviario y demás vías de acceso de transporte terrestre.

**XIV.** Gasolineras establecidas en la Entidad.

**XV.** Aeropuertos y aeródromos.

**XVI.** Ubicación de parques nacionales y parques estatales.

**XVII.** Ubicación de áreas naturales protegidas.

**XVIII.** Ubicación de estaciones de policía, bomberos y demás servicios de emergencia.

**XIX.** Ubicación de hospitales, clínicas y centros de salud.

**XX.** Ubicación de instituciones educativas.

**XXI.** Ubicación de espacios y unidades deportivas.

**XXII.** Ubicación de edificios gubernamentales.

**XXIII.** Ubicación de centros religiosos.

**XXIV.** Ubicación de campos de cultivo.

**XXV.** Ubicación de cámaras y botones de pánico conectados a los servicios de emergencia estatales y municipales.

**XXVI.** Ubicación de lugares con incidencia delictiva y los delitos cometidos en ellos.

**XXVII.** Ubicación de bibliotecas públicas.

**XXVIII.** Demás información que los órganos del Estado estimen pertinente, debiendo observar las disposiciones establecidas en esta Ley, en la Ley de Protección de Datos Personales del Estado de Chihuahua y demás disposiciones aplicables.

**CAPÍTULO NOVENO**

**DEL CORREO ELECTRÓNICO INSTITUCIONAL**

**Artículo 153.** El correo electrónico institucional es el medio oficial por el cual las y los servidores públicos de los órganos del Estado podrá realizar comunicaciones internas o externas, así como llevar a cabo notificaciones y la entrega de documentos relacionados con los trámites, servicios, procesos y procedimientos administrativos y jurisdiccionales o con cualquier otro acto que se encuentre bajo la competencia de las instituciones públicas del ámbito estatal y municipal.

**Artículo 154.** Los órganos del Estado serán responsables del manejo, custodia y mantenimiento de todos los servicios relacionados con los correos electrónicos institucionales.

Los órganos del Estado podrán adquirir bajo cualquier figura o arrendar de una tercera persona, los servicios relacionados con el manejo, custodia y mantenimiento de los correos electrónicos institucionales.

**Artículo 155.** Las y los servidores públicos que se encarguen de la recepción, tramitación y resolución de cualquier trámite, servicio, proceso o procedimiento administrativo o jurisdiccional, comunicación o cualquier otro acto que recaiga en la competencia de los órganos del Estado, deberán contar con una cuenta de correo electrónico institucional.

La cuenta de correo electrónico institucional mencionada en el párrafo anterior, deberá ser otorgada por el órgano del Estado al que se encuentra adscrito la o el servidor público.

**Artículo 156.** Las personastitulares de los órganos del Estado deberán designar a la o a las personas que se encargarán del otorgamiento de las direcciones de correo electrónico institucional.

**Artículo 157.** Cada uno de los órganos del Estado deberán contar con un dominio de correo electrónico institucional propio.

**Artículo 158.** Para que las notificaciones realizadas por medio de correo electrónico institucional, así como la entrega de documentos que se lleve a cabo por dicha vía se consideren válidas, se deberán observar las disposiciones establecidas en las normas aplicables a cada materia.

**CAPÍTULO DÉCIMO**

**DE LOS ESTRADOS DIGITALES**

**Artículo 159.** Los estrados digitales son uno de los medios de información que podrán ser utilizados por los órganos del Estado para la realización de notificaciones relacionadas con los trámites, servicios, procesos y procedimientos administrativos o jurisdiccionales, comunicaciones y demás actos que recaigan dentro de su competencia.

Los estrados digitales podrán ser consultados dentro de los portales informativos, portales transaccionales y aplicaciones móviles habilitadas por los órganos del Estado.

**Artículo 160.** Los estrados digitales deberán estar disponibles para su consulta por cualquier persona, no debiendo mediar el uso de la firma electrónica avanzada o de cualquier otro dispositivo o herramienta que sirva para la identificación de quienes los consultan.

**Artículo 161.** Para otorgar validez a las notificaciones realizadas por medio de estrados digitales, se deberán observar las disposiciones establecidas en las normas aplicables a cada materia.

**TÍTULO SEXTO**

**DEL SOFTWARE LIBRE Y CÓDIGO ABIERTO**

**CAPÍTULO PRIMERO**

**DE LA CREACIÓN DE SOFTWARE LIBRE Y CÓDIGO ABIERTO**

**Artículo 162.** A fin de promover la creación y desarrollo de software libre y código abierto para beneficio de la ciudadanía chihuahuense, el Instituto, en coordinación con el Consejo y los órganos del Estado, fomentarán las actividades conducentes para detectar las necesidades de creación de software libre y código abierto en los sectores público, privado, social y académico del Estado.

**Artículo 163.** El Instituto convocará anualmente a participar por medio de un portal transaccional habilitado por el organismo, a la sociedad civil, a los órganos del Estado y al sector académico, para que expongan las necesidades de creación de software libre y código abierto.

Asimismo, realizará un diagnóstico que será remitido a la Secretaría Técnica para su inclusión en la Estrategia General de TIC.

Derivado del diagnóstico mencionado en el párrafo anterior, el Instituto podrá preponderar la realización de proyectos de software libre y código abierto, para que sean considerados como proyectos de atención prioritaria dentro de su proyecto interno.

**Artículo 164.** El Instituto, en coordinación con las instituciones de educación correspondientes, fomentarán en el estudiantado de todos los niveles educativos del Estado, el impulso de acciones específicas tendientes a la creación, desarrollo y uso de software libre y código abierto.

Para ello, sugerirá que se observen aquellos rubros establecidos en la Estrategia General de TIC.

**CAPÍTULO SEGUNDO**

**DEL DESARROLLO DE SOFTWARE LIBRE Y CÓDIGO ABIERTO**

**Artículo 165.** Los órganos del Estado podrán auxiliarse del Instituto para llevar a cabo las acciones concernientes a desarrollar, implementar y poner en marcha los proyectos de software libre y código abierto que permitan la implementación del gobierno digital, para lograr mayor eficiencia y seguridad en los trámites, servicios, procesos y procedimientos administrativos o jurisdiccionales, comunicaciones y demás actos que se encuentren bajo su competencia, así como un ahorro progresivo de recursos y el incremento en la productividad de las y los servidores públicos.

**Artículo 166.** Para dar cumplimiento a lo establecido en el artículo anterior, el Instituto convocará a los sectores público, privado, social y académico, para que se lleven a cabo proyectos para la creación y desarrollo de instrumentos tecnológicos basados en software libre y código abierto, debiendo observar para ello, los principios y bases establecidos en esta Ley, su Reglamento y en demás disposiciones, lineamientos e instrumentos complementarios emitidos por el Consejo.

**Artículo 167.** El Instituto contribuirá al desarrollo productivo del Estado, a través de la vinculación entre personas creadoras, desarrolladoras y usuarias de software libre y código abierto.

**Artículo 168.** Los órganos del Estado podrán mantener comunicación con el Instituto, ya sea a través de su Dirección General o por intermediación de la Secretaría Técnica, a efecto de que pueda brindarles asesoría en relación con las actividades que deban realizar para llevar a cabo procesos tendientes al desarrollo de software libre y código abierto, debiendo observar para ello, los principios y bases establecidos en esta Ley, su Reglamento y en demás disposiciones, lineamientos e instrumentos complementarios emitidos por el Consejo.

**CAPÍTULO TERCERO**

**DEL FOMENTO PARA LA UTILIZACIÓN DEL SOFTWARE LIBRE Y CÓDIGO ABIERTO**

**Artículo 169.** El Instituto promoverá de forma coordinada con el Consejo, la adquisición y uso de software libre y código abierto en las TIC que habiliten, con excepción de los casos de que, por sus propias características, deban utilizar software licenciado.

**Artículo 170.** Los órganos del Estado serán responsables de capacitar a las y los servidores públicos adscritos a ellos, que utilicen TIC con software libre y código abierto, pudiendo auxiliarse de la Secretaría Técnica y del Consejo para la consecución de este objetivo.

**Artículo 171.** La Secretaría de Educación y Deporte coordinará acciones con el Instituto para promover que, en las instituciones de educación públicas y privadas, las y los estudiantes desarrollen competencias en la creación, desarrollo y utilización del software libre y código abierto; de acuerdo con los principios y las bases establecidas en esta Ley, su Reglamento y demás disposiciones, lineamientos e instrumentos complementarios emitidos por el Consejo.

**CAPÍTULO CUARTO**

**DE LA DIFUSIÓN DEL SOFTWARE LIBRE Y CÓDIGO ABIERTO**

**Artículo 172.** El Instituto, en coordinación con la Secretaría Técnica, realizará una campaña de difusión en la que destacará las ventajas y beneficios de la utilización del software libre y código abierto, de acuerdo con las bases establecidas en esta Ley, su Reglamento y demás disposiciones, lineamientos e instrumentos complementarios emitidos por el Consejo.

**Artículo 173.** El Instituto realizará anualmente un encuentro para el desarrollo de software libre y código abierto, en el que difundirán los logros y alcances que se hayan obtenido en este rubro pudiendo invitar a quienes integran el Consejo o cualquier persona servidora pública adscrita a los órganos del Estado.

**Artículo 174.** El Instituto editará un órgano de difusión en formato digital que estará disponible en su portal informativo, así como en el del Poder Ejecutivo y en el del Consejo, en el que se den a conocer los avances que se hayan tenido en materia de creación, desarrollo, utilización y difusión del software libre y código abierto, de acuerdo con lo establecido en esta Ley.

En el referido órgano de difusión podrán publicarse otros documentos relacionados con el tema del software libre y código abierto, así como aquellos instrumentos que el Instituto y el Consejo estimen pertinentes.

**CAPÍTULO QUINTO**

**DEL INSTITUTO**

**Artículo 175.** El Instituto contará con las siguientes atribuciones:

1. Promover la creación, desarrollo, validación, utilización y difusión del software libre y código abierto en los sectores público, privado, social y académico del Estado.
2. Ser la instancia coordinadora de los esfuerzos que se lleven a cabo en los sectores público, privado, social y académico del Estado, en materia de creación, desarrollo, validación, utilización y difusión del software libre y código abierto.
3. Auxiliar a la Secretaría Técnica en la elaboración de la Estrategia General de TIC.
4. Auxiliar a la Secretaría Técnica y a la Secretaría de Seguridad Pública en la elaboración del Programa de Seguridad Informática.
5. Fomentar, en coordinación con las instituciones de educación superior del Estado, en docentes, estudiantes de licenciatura, especialización, maestría y doctorado, el impulso de acciones específicas tendientes a la creación y desarrollo de software libre y código abierto.
6. Promover el desarrollo de proyectos de software libre y código abierto, que permitan lograr mayor eficiencia en los procesos internos de los órganos del Estado, el ahorro progresivo de recursos y el incremento en la productividad de las y los servidores públicos, de acuerdo con lo establecido en esta Ley, su Reglamento y demás disposiciones, lineamientos e instrumentos emitidos por el Consejo.
7. Emitir opinión respecto de los casos de excepción, en los que no sea posible la utilización de software libre y código abierto.
8. Promover la capacitación a los sectores público, privado, social y académico en materia de creación, desarrollo, utilización y difusión del software libre y código abierto, conforme a lo establecido en esta Ley, su Reglamento y demás disposiciones, lineamientos e instrumentos emitidos por el Consejo.
9. Suscribir convenios con los órganos del Estado y con autoridades del ámbito internacional, federal, estatal, municipal, de otras entidades federativas, con municipios o alcaldías de otras entidades federativas, así como con instituciones del ámbito privado y social, cuya labor cuente con objetivos afines, a efecto de fomentar la creación, desarrollo, validación, utilización y difusión del software libre y código abierto.
10. Las que se establezcan en esta Ley, su Reglamento y demás disposiciones, lineamientos e instrumentos complementarios emitidos por el Consejo.

**TÍTULO SÉPTIMO**

**DE LAS RESPONSABILIDADES Y MEDIOS DE DEFENSA**

**SECCIÓN PRIMERA**

**DE LAS RESPONSABILIDADES**

**Artículo 176.** El incumplimiento de las obligaciones establecidas en la presente Ley, por parte de las y los servidores públicos, serán sancionadas en términos de la Ley General de Responsabilidades Administrativas y demás normatividad aplicable.

**Artículo 177.** Los procedimientos administrativos que deriven de las faltas a lo dispuesto en la presente Ley, se aplicarán con independencia de las responsabilidades civiles o penales que se actualicen por la comisión de una acción u omisión relacionada con la infracción a los preceptos de esta Ley.

**Artículo 178.** Toda persona que tenga conocimiento de la posible comisión de un delito en las materias que esta Ley regula, está obligada a denunciarlo ante el Ministerio Público y, en caso de urgencia, ante alguna persona en ejercicio de funciones públicas de los órganos del Estado a que se refiere esta Ley.

Toda persona que, en ejercicio de funciones públicas, tenga conocimiento de la probable existencia de un delito en las materias que esta Ley regula, está obligada a hacerlo saber, en un plazo no mayor a cuarenta y ocho horas, al Ministerio Público y a transmitirle todos los datos que tuviere.

**SECCIÓN SEGUNDA**

**DE LOS MEDIOS DE DEFENSA**

**Artículo 179.** Las personas que se consideren afectadas por los actos o resoluciones que dicten o ejecuten los órganos del Estado, en atención a las previsiones de esta Ley, podrán interponer los medios de defensa contemplados en la Ley de Procedimiento Administrativo del Estado de Chihuahua.

**ARTÍCULO SEGUNDO.-**  Se **ADICIONA** al artículo 35 Ter, fracción XIII, el inciso h);y se **DEROGA** del artículo 34**,** la fracción XXIX, ambos de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Chihuahua, para quedar redactados de la siguiente manera:

**ARTÍCULO 34.** …

 I. a XXVIII. …

 XXIX. **Se deroga**.

 XXX. …

**ARTÍCULO 35 Ter.** …

I. a XII. …

 XIII. …

 a) a g) …

 **h) Coordinar la estrategia de digitalización de los trámites, servicios, procesos y procedimientos de la Administración Pública Estatal, así como la implementación de las plataformas digitales que para esto se requieran.**

XIV. y XV. …

**ARTÍCULOS TRANSITORIOS**

**PRIMERO.-** La presente Ley entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Estado.

**SEGUNDO.-** Se abroga la Ley de Firma Electrónica Avanzada del Estado de Chihuahua, publicada en Periódico Oficial del Estado el ocho de julio de dos mil veinte.

**TERCERO.-** Se abroga la Ley de Software Libre y Código Abierto del Estado de Chihuahua, publicada en el Periódico Oficial del Estado el veinte de octubre de dos mil dieciocho.

**CUARTO.-** Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente Decreto.

**QUINTO.-** Las disposiciones legales y administrativas expedidas en las materias reguladas por esta Ley, que al momento de su publicación se encuentren vigentes, seguirán siendo aplicables en lo que no se opongan a esta norma, hasta en tanto se expidan las que deban sustituirlas.

**SEXTO.-** Dentro de los ciento ochenta días naturales siguientes a la entrada en vigor de la presente Ley, se deberá instalar el Consejo, por convocatoria de la Presidencia.

**SÉPTIMO.-** El Poder Ejecutivo deberá iniciar la implementación de portales informativos y portales transaccionales dentro del primer año siguiente a la publicación del presente Decreto.

Los demás órganos del Estado deberán iniciar la implementación de portales informativos y portales transaccionales conforme a su capacidad técnica, operativa, material y presupuestal.

**OCTAVO.-** El primer Programa deberá ser emitido a más tardar ciento ochenta días hábiles contados a partir de la entrada en vigor del presente Decreto.

**NOVENO.-** El primer Programa de Seguridad Informática deberá ser emitido dentro del primer año posterior a la publicación del primer Programa.

**DÉCIMO.-** La primera Estrategia General de TIC, deberá ser emitida dentro de los primeros seis meses posteriores a la publicación del primer Programa.

**UNDÉCIMO.-** En lo que concierne a lo establecido en el artículo 28 de esta Ley, esta entrará en vigor una vez que se hayan publicado los primeros proyectos internos, debiendo dicho rubro formar parte de la Estrategia General de TIC inmediata posterior.

**DUODÉCIMO.-** El Programa Estatal para la Creación, Desarrollo, Validación, Utilización y Difusión del Software Libre y Código Abierto seguirá vigente hasta en tanto se expida la primera Estrategia General de TIC.

**DECIMOTERCERO.-** La ventanilla virtual deberá entrar en operaciones dentro del año siguiente a la entrada en vigor del presente Decreto.

**DECIMOCUARTO.-**  A partir de la entrada en vigor del presente Decreto, todos los trámites, servicios, procesos y procedimientos administrativos o jurisdiccionales, comunicaciones y demás actos que recaigan dentro de la competencia de los órganos del Estado podrán ser desahogados de manera digital, sin perjuicio de aquellos que ya se realizaban a través de esa vía.

**DECIMOQUINTO.-**  El Poder Ejecutivo, a través de las instancias correspondientes, realizará las adecuaciones estructurales y las transferencias presupuestarias necesarias de acuerdo a los ajustes previstos en el presente Decreto, a efecto de garantizar el ejercicio de las atribuciones transferidas.

**DECIMOSEXTO.-** La Secretaría de Hacienda establecerá las disposiciones o lineamientos necesarios para la transferencia de los recursos humanos, materiales o financieros correspondientes.

**DECIMOSÉPTIMO.-** Las menciones contenidas en otras disposiciones legales, respecto de las dependencias y entidades cuyas funciones, atribuciones, derechos u obligaciones se reforman en virtud del presente Decreto, se entenderán referidas a aquellas que reciben según las transferencias respectivas.

**DECIMOCTAVO.-** Los asuntos que se encuentren en trámite a la entrada en vigor del presente Decreto, continuarán su despacho por la dependencia o entidad que resulten competentes en virtud de este, hasta que se den las transferencias necesarias.

**DECIMONOVENO**.- El Poder Ejecutivo contará con un término de 180 días naturales a partir de la entrada en vigor del presente Decreto, para presentar las reformas legales, reglamentarias y administrativas necesarias para adecuar el marco jurídico estatal, a efecto de poder estar en aptitud de dar viabilidad programática y orgánica al presente Decreto.

**VIGÉSIMO.**- Las facultades y compromisos derivados de convenios o acuerdos celebrados con dependencias o entidades de la Administración Pública Federal, Estatal o Municipal serán asumidos por el área competente de conformidad con el presente Decreto.

**ECONÓMICO.** Aprobado que sea, túrnese a la Secretaría para que elabore la Minuta de Decreto, en los términos en que deba publicarse.

**D A D O** en el Salón de Sesiones del Honorable Congreso del Estado, a los ocho días del mes de diciembre del año dos mil veintidós, en la Ciudad de Chihuahua, Chihuahua.

**ASÍ LO APROBÓ LA COMISIÓN DE GOBERNACIÓN Y PUNTOS CONSTITUCIONALES, EN REUNIÓN DE FECHA 06 DE DICIEMBRE DEL 2022.**

**POR LA COMISIÓN DE GOBERNACIÓN Y PUNTOS CONSTITUCIONALES**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **INTEGRANTES** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** |
| http://www.congresochihuahua.gob.mx/mthumb.php?src=diputados/imagenes/fotosOficiales/319.jpg&w=200&h=265&zc=1 | **DIP. OMAR BAZÁN FLORES****PRESIDENTE** |  |  |  |
| http://www.congresochihuahua.gob.mx/mthumb.php?src=diputados/imagenes/fotosOficiales/305.jpg&w=200&h=265&zc=1 | **DIP. ADRIANA TERRAZAS PORRAS****SECRETARIA** |  |  |  |
| http://www.congresochihuahua.gob.mx/mthumb.php?src=diputados/imagenes/fotosOficiales/288.jpg&w=200&h=265&zc=1 | **DIP. JOSÉ ALFREDO CHÁVEZ MADRID****VOCAL** |  |  |  |
| http://www.congresochihuahua.gob.mx/mthumb.php?src=diputados/imagenes/fotosOficiales/293.jpg&w=200&h=265&zc=1 | **DIP. AMELIA DEYANIRA OZAETA DÍAZ****VOCAL** |  |  |  |
| http://www.congresochihuahua.gob.mx/mthumb.php?src=diputados/imagenes/fotosOficiales/296.jpg&w=200&h=265&zc=1 | **DIP. GABRIEL ÁNGEL GARCÍA CANTÚ****VOCAL** |  |  |  |
| http://www.congresochihuahua.gob.mx/mthumb.php?src=diputados/imagenes/fotosOficiales/312.jpg&w=200&h=265&zc=1 | **DIP. FRANCISCO ADRIÁN SÁNCHEZ VILLEGAS****VOCAL** |  |  |  |
|  | **DIP. ANA MARGARITA BLACKALLER PRIETO****VOCAL** |  |  |  |

|  |
| --- |
| La presente hoja de firmas corresponde al Dictamen por medio el cual se expide la Ley de Gobierno Digital para el Estado de Chihuahua.  |

1. Declaración de Principios de la Cumbre Mundial sobre la Sociedad de la Información. Disponible en: <https://www.itu.int/net/wsis/docs/geneva/official/dop-es.html> [↑](#footnote-ref-1)
2. Naciones Unidas A/HRC/20/L.13. Disponible en: <https://ap.ohchr.org/documents/S/HRC/d_res_dec/A_HRC_20_L13.pdf> [↑](#footnote-ref-2)
3. Corte Interamericana de Derechos Humanos. Opinión Consultiva OC-5/85 del 13 de noviembre de 1985 Disponible en: <https://www.corteidh.or.cr/docs/opiniones/seriea_05_esp.pdf> [↑](#footnote-ref-3)
4. OEA, una agenda hemisférica para la defensa de la libertad de expresión, relatoría especial para la libertad de expresión, Comisión Interamericana de Derechos Humanos, 2009. Disponible en: <https://www.oas.org/es/cidh/expresion/docs/publicaciones/agenda%20hemisf%C3%A9rica%20espa%C3%B1ol%20fina%20con%20portada.pdf> [↑](#footnote-ref-4)
5. Declaración Conjunta sobre Libertad de Expresión e Internet (OEA). Disponible en: <https://www.oas.org/es/cidh/expresion/showarticle.asp?artID=849&lID=2> [↑](#footnote-ref-5)
6. UN E-Government Survey 2022.United Nations. Disponible en: <https://desapublications.un.org/sites/default/files/publications/2022-09/Web%20version%20E-Government%202022.pdf> [↑](#footnote-ref-6)
7. OECD (2016), OECD Science, Technology and Innovation Outlook 2016, OECD Publishing, París. Disponible en:

http://dx.doi.org/10.1787/sti\_in\_outlook-2016-en [↑](#footnote-ref-7)
8. Andersen, D. F., Belardo, S., y Dawes, S. S. (1994). Strategic Information Management: Conceptual Frameworks for the

Public Sector. Public Productivity and Management Review, 17, 335–353. [↑](#footnote-ref-8)
9. Andersen, D.F., and S. S. Dawes. (1991). Government Information Management. A Primer and Casebook. Englewood

Cliffs, NJ: Prentice Hall. [↑](#footnote-ref-9)
10. Grönlund, A., y Thomas A. Horan. 2005. “Introducing e-Gov: History, Definitions, and Issues.” Communications of the

Association for Information Systems 15 (1): 713–729. [↑](#footnote-ref-10)
11. Millán Vargas, A., & Quintana Alonso, L. (2021). Confinamiento y gobierno digital. Controversias Y Concurrencias

Latinoamericanas, 12(22), 91-105. Recuperado a partir de <https://ojs.sociologia-alas.org/index.php/CyC/article/view/246> [↑](#footnote-ref-11)
12. Gil-García, J. Ramón, y L.F. Luna-Reyes. (2008). “Una Breve Introducción Al Gobierno Electrónico: Definición,

Aplicaciones y Etapas.” Revista de Admnistración Pública XLIII (2): 49–72. [↑](#footnote-ref-12)
13. Ranking de Portales Estatales 2019. Véase: <https://u-gob.com/ranking-de-portales-estatales-2019/> [↑](#footnote-ref-13)
14. DECRETO por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de los artículos 6o., 7o., 27, 28, 73, 78, 94 y 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de telecomunicaciones. Disponible en: <https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5301941&fecha=11/06/2013#gsc.tab=0> [↑](#footnote-ref-14)
15. ACUERDO por el que se expide la Estrategia Digital Nacional 2021-2024. Disponible en: <https://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5628886&fecha=06/09/2021#gsc.tab=0> [↑](#footnote-ref-15)
16. Plan Estatal de Desarrollo Chihuahua 2022-2027. Disponible en: <https://www.congresochihuahua2.gob.mx/biblioteca/iniciativas/archivosIniciativas/17946.pdf> [↑](#footnote-ref-16)